

DORMIR CON EL ENEMIGO. LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA POLÍTICA EN BRASIL *

WALDO ANSALDI**

A Sílvia Dutrénit Bielous, uruguaya en México, por una generosa invitación que me permitió seguir pensando Brasil desde Argentina.

En la tradición política de las élites brasileñas, los liberales de ayer prefieren conciliar con los conservadores y conquistar el poder por la vía menos arriesgada...
Paulo Sérgio Pinheiro

De manera muy curiosa, como advierte Sérgio Abranches, Brasil muestra -al igual que Polonia- un caso en el cual organizaciones de la sociedad civil juegan un decisivo papel en la instrumentalización de la transición (Abranches, 1982: 325-326). Si, en rigor, el gobierno Geisel no inicia ésta, sino sólo una fase de *distensión* (1974-1979), no menos cierto es que sienta algunas bases que permitirán continuar avanzando por el gradual proceso de salida de la dictadura, el que prosigue con otras dos fases, la de *apertura* (1979-1982) y la de *transición* (a partir de 1982). Es por ello que la acción de algunas de esas instituciones se revela clave: la Iglesia Católica, la Asociación Brasileña de Prensa, la Orden de los Abogados de Brasil y los nuevos sindicatos y movimientos sociales. Tal accionar es decisivo a partir de la presidencia del general Ernesto Geisel (1974-1979), esto es, en la fase de la distensión. La dialéctica de la política lleva al gobierno a una situación en la que debe aprender a convivir con una oposición creciente, a "dormir con el enemigo".¹ Parte sustancial de esa oposición se genera en el interior de sectores de la sociedad considerados integrantes de las élites (OAB, ABI, CNBB, incluso el MDB), a menudo aprovechando estructuras asociativas y corporativas que vienen de los tiempos iniciales del varguismo, como en los casos de los abogados y los propietarios de diarios. Atinadamente, Maria Helena Moreira Alves se pregunta: "¿Por qué ciertos sectores de élite de la sociedad civil retiraron su apoyo al Estado y pasaron tan decididamente a la resistencia política organizada y efectiva?" La respuesta, entiende la politóloga, se encuentra en la conjunción de tres factores: 1) importantes grupos de aquélla se sienten "profesionalmente amenazados por

* Este artículo reproduce, ligeramente ampliada, la ponencia presentada en el Segundo Congreso Nacional de Ciencia Política, "Globalización, entre el conflicto y la integración", organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1 a 4 de noviembre de 1995.

El trabajo expone algunas de las conclusiones alcanzadas en una investigación, próxima a finalizar, sobre *Partidos y sistema de partidos en el Brasil republicano, 1889-1989*, proyecto autónomo derivado, a su vez, del dirigido por la doctora Sílvia Dutrénit Bielous, en el Instituto Mora, México DF, sobre Historia de los partidos políticos en América Latina. Preparé, para éste, el artículo "Continuidades y rupturas en un sistema de partidos políticos en situación de dictadura: Brasil, 1964-1985", incluido en el libro Sílvia Dutrénit Bielous (coord.), *La diversidad de lo partidario durante las dictaduras: Argentina, Brasil y Uruguay*, en prensa.

** Doctor en Historia. Investigador del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (de cuya Área de Sociología Histórica es Coordinador), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Titular Regular de Historia Social Latinoamericana en la misma Facultad.

¹ Razones de economía de espacio me impiden desarrollar aquí el contexto en el cual se despliega el accionar de las organizaciones de la sociedad civil. Me ocupo de él en Ansaldo (1995).

el mantenimiento de rígidos controles represivos y de la centralización del poder", 2) los integrantes de esos mismos grupos se sienten también "personalmente amenazados por la violencia de la represión", 3) ellos comienzan a considerar al propio Estado autoritario innecesario para la protección de sus intereses y más "como un estorbo que como un aliado" (1984: 220).

En el nombre del padre

Si bien la participación de la Iglesia Católica (IC) brasileña en el escenario político no es extraña en la historia del país -como en casi toda América Latina, con pocas excepciones (v.gr., Uruguay)-, la misma experimenta un notable viraje en la década de 1970, cuando cambia su orientación pastoral y se acerca "no sólo a los sectores populares, sino también a las «oposiciones» políticas. Es la Iglesia, seguida por otras instituciones de la sociedad civil, quien habla en nombre de los derechos humanos, denuncia torturas, toma la palabra por los presos políticos. No hay duda que en la sociedad brasileña la jerarquía de la Iglesia es parte de las élites, así como lo son la *Ordem dos Advogados do Brasil*, la *Associação Brasileira de Imprensa*, el mismo *Movimento Democrático Brasileiro* [MDB] (transformado después en PMDB). La Iglesia se une entonces a (y casi diríamos lidera) el movimiento de oposición de las élites liberales brasileñas al autoritarismo del régimen" (Grossi, 1989: 170). No se trata, empero, de la "vieja Iglesia", sino de la "nueva". En efecto, como dice Luiz Gonzaga de Souza Lima -un sociólogo excelente conocedor del tema-, la Iglesia es la institución que más se transforma en la historia de la oposición al régimen; esa transformación no sólo es la que influye más directamente "en la consistencia política y cultural y en la amplitud social de la oposición brasileña", sino que también "es, en sí misma, una intersección de la cuestión moral con la cuestión política, sea cuando asume el papel de «voz de los que no tienen voz», sea cuando se torna permeable a la participación y a la expresión cultural de los «excluidos», permitiendo las articulaciones sociales elementales para la estructuración de nuevos sujetos políticos de origen popular". A su juicio, el proceso de cambio de la Iglesia es posible por la acción de "las clases populares", que irrumpen "en su espacio institucional a través de conexiones «internas» (agentes de pastoral)" y se convierten en agentes políticos de aquél (1985: 46 y 48).²

En 1964, la jerarquía eclesiástica ha acompañado a los golpistas en la ruptura de la legalidad jurídico-política, mas ya en 1967 algunos sectores comienzan a compartir reclamos opositores, intensificando y ampliando este papel a partir de 1969. Particular importancia tiene, en él, la defensa de los derechos humanos (protección de los presos políticos, defensa de aquellos que se encuentran en situación de peligro o son perseguidos) y la acción o el trabajo social. En este sentido, Maria Helena Alves interpreta que la IC logra "superar el desfase entre la «política formal» y la «política de base»" y se convierte en "la única institución que permite la experiencia en ambos niveles de la participación política" (1984: 201).

En el plano de la "política formal" actúa la *Conferência Nacional dos Bispos do Brasil* (CNBB), creada en 1952 bajo la dirección de Dom Helder Câmara, encargada de hacer efectivas las conclusiones en materia política y social aprobadas en periódicos sínodos. "A través de sus representantes, comisiones y organizaciones regionales, la CNBB organiza la población en proyectos de autoayuda y en la coordinación política, con tácticas y

² Un análisis de tal proceso de transformación puede verse en el libro del mismo Luiz Gonzaga de Souza Lima, *Evolução política dos católicos e da Igreja no Brasil*, Editora Vozes, Petrópolis, 1979. Hay varios trabajos dedicados al papel y transformaciones de la Iglesia Católica durante la dictadura, tales como los de Márcio Moreira Alves, *A Igreja e a política no Brasil*, Editora Brasiliense, São Paulo, 1979, Thomas Bruneau, *The Political Transformation of the Brazilian Catholic Church*, Cambridge University Press, London, 1979, Paulo José Krischke, *A Igreja e as crises políticas no Brasil*, Editora Vozes, Petrópolis, 1979, Paulo Krischke e Scott Mainwaring (eds.), *A Igreja nas bases em tempo de transição (1974-1985)*, L & PM, Porto Alegre, 1986.

grupos de presión destinados a enfatizar las responsabilidades de las autoridades, tomar iniciativas directas o responsabilizar al Estado por omisión (...). La CNBB se subdivide en representaciones regionales y sedes diocesanas locales. Cada nivel institucional elabora un plan pastoral bienal de las prioridades religiosas y políticas de trabajo", dentro de las cuales alcanza creciente relieve la defensa de los derechos fundamentales, civiles y políticos, en los términos definidos por la Declaración de los Derechos del Hombre de la Organización de las Naciones Unidas (*ibidem*).

En el plano de la "política de base", la acción eclesial se despliega a través de varias Pastorales, cada una de ellas responsable de atender determinados espacios sociales, que le dan su respectivo nombre: de la Tierra, Urbana, de la Iglesia en el Mundo, de la Familia, de la Periferia, de los Marginales, de la Favela, del Mundo del Trabajo, Obrera, del Negro, del Menor y de los Derechos Humanos, mientras que el trabajo entre los indígenas se desarrolla por medio del *Conselho Indigenista Missionário* (CIMI), una de las organizaciones claves para entender el proceso de constitución de los indígenas como sujeto político.³ "A nivel local, cada pastoral estructura su propia red de grupos para el trabajo colectivo", la que consiste en una creciente desagregación de unidades que funcionan al estilo celular, lo cual permite organizar a millares de personas en una misma área. "Esta amplia red organizacional envuelve a la población en una experiencia que le permite ganar confianza en la participación política y social, adquirir respeto propio y preparación y descubrir liderazgos propios", al tiempo que actúa como una veloz y eficaz red informativa, un aspecto clave en los casos de detenciones, y contribuye a erosionar los tres principales componentes de la cultura del miedo, el silencio, el aislamiento, la incredulidad (Alves, 1984: 201-203).

En el espacio urbano es significativa la acción desplegada por el cardenal Dom Paulo Evaristo Arns, arzobispo de São Paulo desde 1971.⁴ Su arquidiócesis es dividida en 50 sectores y cada uno de ellos en 10 comunidades (lo que hace un total de 500 de éstas), las que, a su vez, pueden crear sus propios grupos encargados de aplicar programas y proyectos específicos. Hacia 1975, la ciudad de São Paulo alberga al principal núcleo represivo del país -en primer lugar el DOI-CODI (*Destacamento de Operações e Informações-Centro de Operações de Defesa Interna*), que opera en el cuartel general del Segundo Ejército-, cuyos desmanes y brutalidades mueven a Arns a crear la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz, formada por algunos de los más destacados juristas paulistas, con la tarea de hacerse cargo de las acciones legales en defensa de los perseguidos y en contra de las autoridades responsables de torturas. El cardenal procura, como objetivo principal, "estimular a la población a resistir la represión violenta de una forma pacífica más firme y no ceder a sentimientos de desesperación, aislamiento e incredulidad". Es así como aprovecha los servicios religiosos para criticar la violencia y exhortar a tener esperanza y a actuar de acuerdo con ella (*idem*: 204).

En febrero de 1975, activistas del MDB y la IC intensifican los reclamos, iniciados en junio del año anterior, por conocer el paradero de 22 presos políticos "desaparecidos", 21 de ellos bajo el gobierno Geisel. Una gestión ante Golbery do Couto e Silva -encabezada por el propio Arns- fracasa, dejando la sensación de que el

³ "La cuestión indígena posee la capacidad extraordinaria de modificar y enriquecer el propio concepto de nación que existía en Brasil. Hoy sabemos todos -gracias a ellos- que somos una sociedad plurinacional, donde conviven (y deben convivir libremente) pueblos con lenguas, tradiciones y culturas diferentes. No es poco, como base del pluralismo, político y cultural" (Souza Lima, 1985: 49-50). El capítulo VIII del Título VIII ("Del orden social") de la Constitución de 1988 trata "de los indios" en dos artículos (231 y 232); en ellos se reconocen una serie de derechos, incluyendo los "originarios sobre las tierras que ocupan" y los que hacen a "su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones". No obstante, la situación de los indígenas que viven en territorio brasileño distan de haber alcanzado el reconocimiento cabal de tales derechos y la propia sociedad en su conjunto está aún lejos de la admisión de ellos como iguales pero diferentes, pese a las generosas palabras de Luis Gonzaga de Souza Lima, que son, al menos en su segunda parte, más una petición de principios y/o una expresión de deseos que una efectiva realidad, si bien hay considerables avances respecto del pasado. En esa dirección, un dato importante es la elección del primer parlamentario federal indígena, el cacique xavante Mário Juruna, elegido en 1982 por el estado de Rio de Janeiro.

⁴ Sobre la actividad del arzobispo pueden verse Getúlio Bittencourt e Paulo Sérgio Markum, *O cardenal do povo: D. Paulo Evaristo Arns*, Alfa-Omega, São Paulo, 1979, y Evaristo Arns, *Em defesa dos direitos humanos*, Editora Brasília/Rio, Rio de Janeiro, 1978, que es una compilación de entrevistas que le efectuaron entre 1970 y 1978.

gobierno no controla las fuerzas de seguridad (Skidmore, 1988: 341). En el Congreso, los legisladores emedebistas solicitan la comparecencia del ministro de Justicia para informar a la Cámara sobre aquellos. Si bien el requerimiento de la presencia del ministro para brindar información a los legisladores sobre temas de su competencia es un procedimiento usual en las prácticas parlamentarias, en este caso y en este tema darle curso favorable es, para el gobierno y sus parlamentarios, enfrentar una cuestión harto delicada, puesto que la violación de los derechos humanos es considerada "territorio prohibido". Así, el gobierno prefiere que la iniciativa del MDB sea una batalla a librarse entre ambos partidos en la Cámara Federal, donde, para ser aprobada es imprescindible el apoyo de la ARENA. De allí, que por mera supremacía numérica, el oficialismo puede decidir su bloqueo, "tarea rigurosamente cumplida por su líder en la Cámara, diputado José Bonifacio", quien con su agresividad hacia el MDB contribuye a agravar el clima político. A su juicio, la iniciativa es una provocación del partido opositor, al cual acusa de estar «haciéndole el juego a los comunistas, cediendo a las presiones de grupos radicales». Más aún, añade Bonifacio, el MDB no colabora «de forma alguna con el proceso de distensión política». Es casi innecesario decir que la solicitud emedebista no obtiene la aprobación de la Cámara (Kinzo, 1988: 154 y 165-166).

Unos meses después, en setiembre, un operativo represivo realizado en la ciudad de São Paulo incluye entre los afectados al periodista Vladimir Herzog, director del departamento de noticias de TV Cultura, un canal no comercial. El 24 de octubre es intimado a comparecer en el DOI-CODI, al cual concurre voluntariamente y donde muere esa misma tarde. Al día siguiente, el comando del Segundo Ejército informa que Herzog, previa confesión de su condición comunista, se ha suicidado en su celda ahorcándose con su propia corbata. El cadáver es enviado a su viuda en féretro lacrado, con orden de no abrir el mismo. La sepultura es realizada bajo control militar.

La muerte de Herzog -un inmigrante yugoslavo, de condición judía y 38 años de edad, graduado en la USP, de cuya Escuela de Comunicaciones ha sido profesor- conmociona a la ciudad, que rechaza la versión oficial del suicidio. La OAB y la ABI (ésta avalada por la firma de mil periodistas) exigen una investigación, los estudiantes y profesores de la USP realizan una huelga de tres días, el sindicato de periodistas se declara en sesión permanente. El cardenal Arns organiza personalmente un servicio fúnebre ecuménico en la catedral paulista, frente a la *Praça da Sé*, que concelebra con dos rabinos y un pastor protestante. A pesar de la ocupación militar de la ciudad y el operativo de aislamiento del lugar, 8.000 personas abarrotan la catedral y 30.000 ocupan la plaza. El sermón del arzobispo, sin perder su obvio contenido teológico, es una enérgica denuncia de la brutalidad de la represión. En él apela a la justicia, al compromiso de los presentes, a decir basta, a la lucha pacífica, a la unidad y a "la esperanza que reside en la solidaridad". Su condena a los responsables es inequívoca: el hombre, nacido del corazón de Dios, no puede ser tocado impunemente por ningún otro semejante y es el mismo Dios quien se encarga de "comunicar personalmente a los hombres que es maldito quien mancha sus manos con la sangre de su hermano".

En el Congreso, el senador Francisco Leite Chaves (MDB) critica el empleo de fuerzas militares en "crímenes ignominiosos", en un duro discurso en el que califica al ejército de estar en peor situación que el alemán durante el nazismo. El Alto Comando reacciona con indignación, mas la turbulencia es sorteada por acciones del MDB y la ARENA, cerrándose el episodio con un nuevo discurso de propio Chaves, ahora elogioso del ejército, y la destrucción de los ejemplares del *Diário do Congresso* correspondientes a la sesión del primer discurso del senador.

Como en Rio de Janeiro en 1968, en ocasión de la muerte del estudiante Edson Luis, el oficio religioso en memoria de Herzog cataliza "la indignación reprimida de una ciudad y de todo un país", al tiempo que su

muerte por tortura se hace "símbolo del movimiento de defensa de los derechos humanos" (Alves).⁵ No obstante, la movilización no impide un nuevo crimen de similar tenor: el 17 de enero de 1976, el obrero metalúrgico Manoel Fiel Filho muere por aplicación de torturas en el DOI-CODI de São Paulo, siendo otra vez la explicación del ejército la de suicidio por ahorcamiento.⁶

El 27 de setiembre de 1977, estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo efectúan una asamblea clandestina para elegir los representantes ante la comisión encargada de reorganizar la UNE. Avanzan, así, en un proceso que ha incluido previamente manifestaciones en silencio por todo el país, siempre reprimidas con violencia por la policía. La noche de aquel día realizan, en la misma casa de estudios, una gran conmemoración abierta, la cual es interrumpida por fuerzas de la Policía Militar -acompañadas de perros ovejeros alemanes y comandadas por el general Erasmo Dias, un duro-, las que destrozan las instalaciones (laboratorios, equipos, materiales de investigación, etc.) y causan ingentes daños materiales, detienen a 3.000 personas (estudiantes, profesores y administrativos) y causan graves heridas a cinco, alcanzadas por bombas de *napalm*. Cuarenta y cinco estudiantes son procesados por desobediencia colectiva, en los términos previstos por la ley de seguridad nacional. El operativo es realizado en momentos en que Arns se encuentra en Roma.

En reacción ante tales atropellos y arbitrariedades, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de São Paulo patrocina tres acciones en los tribunales civiles -una por cada caso-, con las cuales persigue "crear un precedente legal de responsabilizar al gobierno federal por los actos de represión" (Alves).⁷

Se ha dicho antes, siguiendo a Maria Helena Alves, que la IC actúa en dos planos de la política, los de la formal y la de base. La reseña precedente atiende al primero de ellos, mientras que la siguiente presta atención a los movimientos de base o la política informal. Ésta, a su vez, se despliega mediante dos tipos de organizaciones, las seculares y las vinculadas a la propia IC.⁸ Las organizaciones de base cubren una amplísima gama de

⁵ Sobre la muerte de Vladimir Herzog y las protestas posteriores puede verse Fernando Jordán, *Dossiê Herzog: prisão, tortura e morte no Brasil*, Global, São Paulo, 1979.

⁶ Sobre la muerte de este obrero metalúrgico puede verse Carlos Alberto Luppi, *Manoel Fiel Filho: quem vai pagar por este crime?*, Escrita, São Paulo, 1980. Tanto Alves cuanto Skidmore coinciden en atribuir los aberrantes actos represivos cometidos en el DOI-CODI a la posición del general Ednardo d'Avila Mello, comandante del Segundo Ejército desde enero de 1974 y un representante de la línea dura, es decir, un opositor a la política de distensión del presidente Geisel. Éste reacciona con rapidez y energía dimitiendo sumariamente a Mello, sin consulta previa con el Alto Comando del Ejército (trámite éste usual en oficiales de esa jerarquía), reemplazándolo interinamente por el general Ariel Pacca da Fonseca y de modo definitivo por el general Dilermando Gomes Monteiro, ambos alineados con Geisel, a quien también respalda el ministro de Ejército, el general Frota, con el concurso de los cuales neutraliza cualquier reacción de los línea-duras. El historiador norteamericano señala que esta demostración de fuerza y habilidad del presidente tiene su precio: para mantener el apoyo de la oficialidad debe "mostrar dureza en el medio político civil contra la corrupción y la subversión, como los castelistas las definían" (1988: 349).

La autonomía, respecto del propio Estado, de los grupos militares y paramilitares represivos es una cuestión que aparece, con diferente magnitud, en todas las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas durante las décadas de 1960 a 1980. En el caso específico de Brasil constituye una cuestión de significativa trascendencia para explicar las características del proceso de salida de la dictadura. Las zancadillas que tales grupos ponen al gobierno Geisel no son pocas, siendo particularmente destacable el apresamiento y tortura del ciudadano norteamericano Fred Morris, un ex misionero metodista devenido periodista corresponsal en Brasil de *Time* y Associated Press. Morris es detenido y torturado en octubre de 1975, en Recife, jurisdicción del Cuarto Ejército, bastión de línea-duras. Es claro que la acción tiende a complicar las relaciones del gobierno de Geisel con el los Estados Unidos, cuyo presidente James Carter está fuertemente empeñado en una política de defensa de los derechos humanos.

⁷ En los casos de Herzog y Fiel, la Arquidiócesis apoya a ambas familias procurándoles la asistencia jurídica de abogados de la Comisión de Justicia y Paz. En 1978, el Supremo Tribunal del Estado de São Paulo falla en favor de Clarice de Herzog y sus hijos, sentenciando la responsabilidad del gobierno federal en la muerte de Vladimir. También hay un fallo favorable, en primera instancia, en el caso de Manoel Fiel Filho. "Estas acciones civiles representaban otro método de estímulo a la resistencia pacífica a la violencia del Estado" (Alves, 1984: 208).

⁸ Véanse sobre ellos y entre otros, Paul Singer e Vinicius Caldeira Brant (eds.), *São Paulo: o povo em movimento*, CEBRAP/Editora Vozes, Petrópolis, 1981, José Alvaro Moisés *et alii*, *Cidade, povo e poder*, CEDEC/Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1982, y Renato Raul Boschi (org.), *Movimentos coletivos no Brasil urbano*, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1983. Tanto los movimientos de base cuanto los nuevos movimientos sociales brasileños, en general, han sido objeto de numerosísimos estudios. Un amplio relevamiento bibliográfico, que cubre el período 1974-1984 y las actividades de los

situaciones societales y tienen diversas magnitudes organizativas, mas son siempre expresión de movilización de la sociedad civil brasileña en un contexto de dictadura y de nuevas formas de hacer política, así como parte esencial de la ruptura de la cultura del miedo y de la construcción del largo camino que lleva a la salida de la dictadura.

Las seculares tienen, obviamente, independencia de la IC y varias de ellas se han constituido bastante antes de la dictadura, como en el caso de las *Sociedades de Amigos de Bairro* (SAB) de São Paulo, ya existentes en los comienzos de la fase populista, en 1945-1946, y florecientes a partir del janismo, en 1953 -su origen, pues, se relaciona con funciones de mediación clientelar, como señala Maria H. Alves-, si bien su gran expansión se produce bajo los gobiernos de Geisel y Figueiredo (1974-1985). En otras ocasiones se denominan *Associações de Amigos de Bairro* (AAB), *associações de moradores de favelas* o *associações comunitárias*.

Las sociedades o asociaciones barriales y las de moradores y favelados existen en todo el país, si bien la mayoría se encuentra en las grandes ciudades. Así, por caso, en Rio de Janeiro hay, a comienzos de los años 1980, por lo menos 110 organizaciones reunidas en la *Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro* (FAFERJ), 350 en la Baixada Fluminense (unas 80 de ellas coordinadas por el *Movimento de Amigos de Bairro de Nova Iguaçu* y otras 40 por la *Federação das Associações de Moradores do Estado de Rio de Janeiro*, FAMERJ). En el estado de São Paulo, hacia la misma época, hay 1.300 entidades, de las cuales 500 se nuclean en el *Conselho de Coordenação das Sociedades de Amigos de Bairro da Cidade de São Paulo*, mientras las otras 800 se encuentran en el Gran São Paulo. Según datos de 1980, por entonces se constituye una nueva asociación de moradores cada semana, al menos en el estado de Rio de Janeiro, si bien se constata una tendencia similar en los de Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul y Santa Catarina (Alves, 1984: 226-227).

Las asociaciones de moradores y favelados tienen que ver con el proceso de migración del campo a la ciudad y la expansión capitalista. Su *locus* principal es la periferia de las grandes ciudades, donde proliferan los barrios pobres; por eso, sus principales demandas son la provisión de viviendas, cloacas, desagües, instalaciones sanitarias, agua, electricidad, recolección de basura, guarderías infantiles, escuelas, acceso legal a la tierra (urbana), o bien el congelamiento de precios de los alimentos, entre otras.⁹ De allí saltan al reclamo de mayor participación social, económica y política en los niveles municipal, estadual y federal, procurando una mejor redistribución de los ingresos y cambios favorables en las duras condiciones de trabajo, donde campea una alta tasa de explotación. Si bien muchas de ellas han nacido vinculadas con prácticas clientelares (incluyendo el clientelismo gubernamental) y persisten en esa función, se aprecia un incremento de "la tendencia a la autonomía y a la acción política ligada a las bases", con un importante grado de democracia interna. Sus prácticas son clásicas: peticiones, reuniones, actos, asambleas, marchas hacia la prefectura, ocupación de sedes administrativas, etc., mas también autoorganización de centros comunitarios, cineclubes, clubes de madres, guarderías infantiles, puestos de salud, actividades recreativas varias (*idem*: 228-229).

movimientos de mujeres, negro, obrero, de trabajadores rurales, de favelados, eclesiásticos de base y sociales urbanos -tal como los catalogaron los autores del mismo-, puede verse en Alberto Noé y Cléa Nascimento dos Santos, "Movimentos sociais no Brasil. Levantamento bibliográfico", en *Política e Administração*, Volume I, nº 2, Fundação Escola de Serviço Público FESPRJ, Rio de Janeiro, julho-setembro 1985, pp. 309-321; todo dicho número está dedicado a movimientos sociales en Brasil. Un excelente trabajo, con amplias referencias bibliográficas, es el de Lúcio Kowarick, "Movimentos urbanos no Brasil contemporâneo: uma análise da literatura", en *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, vol. 1, nº 3, ANPOCS, fevereiro de 1987, pp. 38-50.

⁹ La lucha contra la carestía de los alimentos, por ejemplo, produce una formidable acción de masas como el denominado *Movimento contra o Custo de Vida*, iniciado en 1973 y con un momento culminante en 1977-1978, que recoge un millón y medio de firmas en favor del congelamiento de los precios de los alimentos básicos. Sobre él puede verse el artículo de Tilman Evers, "Síntesis interpretativa del «Movimento do custo de vida», un movimiento urbano brasileño", en *Revista Mexicana de Sociología*, Año XLIII, nº 4, México DF, octubre-diciembre de 1981, pp. 1371-1393.

En cuanto a las asociaciones de base vinculadas a la IC, ellas son expresión orgánica e institucional del trabajo realizado por la CNBB, las diversas Pastorales y "pequeños grupos de fieles organizados junto a una parroquia urbana y rural" o por agentes pastorales (religiosos o laicos). Éstos se denominan *Comunidades Eclesiais de Base* (CEBs). La base es, dicen los teólogos brasileños, "la parte de la población de una sociedad que se encuentra privada al mismo tiempo del tener, del poder y del saber", es decir, el sector social de los que producen la riqueza pero no son partícipes de la organización de su propio trabajo ni de la distribución del producto de éste, como tampoco de la toma de decisiones políticas. El objetivo que se traza la IC es, pues, devolverles a los hombres y mujeres de la base de la sociedad los derechos de tener, saber y poder.¹⁰

Las primeras experiencias de las que luego serán las CEBs se realizan, según unos, en 1956, en Rio de Janeiro, o, conforme otros, en Natal, en 1960, mas su expansión, coinciden todos, comienza tras la violenta represión de 1969. En 1975 ya existen 50.000 en todo el país, subiendo a 80.000 en 1981, actuando principalmente en las áreas rurales y en los barrios pobres y periféricos de las ciudades. Cumplen una doble función: "ofrecer servicios religiosos y el estudio del Evangelio, por un lado, y, por otro, organizar el trabajo de liberación y acciones comunitarias" (Alves, 1984: 231). Cada comunidad está formada por 15 a 25 personas, si bien en el campo pueden llegar a 100 o más, y actúa con independencia de la presencia de un sacerdote o una monja, facilitando así la participación de laicos, la cual permite superar el problema de la carencia de religiosos ordenados, tema clave para una IC que observa preocupada el incremento de los cultos protestantes, espiritistas, afro-brasileños (umbanda, en primer lugar). Más allá de las intenciones originarias del episcopado, las CEBs adquieren un alto grado de autonomía o independencia en relación a la propia iglesia y muchas de ellas tienden a ser parte de la denominada iglesia popular, en la cual pesa fuerte la corriente de la teología de la liberación. Políticamente, en cambio, las CEBs operan en la misma sintonía de oposición a la dictadura y de lucha por la organización popular, explicable por la denominada "opción por los pobres" hecha por IC.¹¹ Ésta implica, a su vez, una demanda de justicia social y una crítica al tipo de capitalismo impulsado por la alianza tecnoburocrático-militar.

Las CEBs se convierten en verdaderas escuelas de participación, organización, democracia y autovalorización individual, prácticas que logran transmitir a otros movimientos sociales e incluso partidos políticos de oposición, en particular el PT. Si bien el contenido estrictamente religioso de las comunidades es obvio e importante, su mayor incidencia se produce en el campo social y político, en el cual actúan a partir del reconocimiento de los problemas fundamentales que cada una de ellas detecta en su ámbito. Según el dominico Frei Beto, coordinador nacional de las CEBs, éstas pasan por cuatro etapas: la primera es la de su formación, poniéndose énfasis en la motivación religiosa y la aspiración de vivir conforme las preceptivas del Evangelio; la segunda es la del pasaje a la acción social, junto a los movimientos populares y donde se encuentran con hombres y mujeres de otras o ninguna fe religiosas, con los cuales comparten la defensa de y la lucha por los oprimidos. La tercera es la del acceso a la conciencia política, etapa en la que se procura el afianzamiento de las organizaciones de los trabajadores y los miembros de las comunidades se integran activamente a las luchas de

¹⁰ Sobre las CEBs pueden verse, entre otros, Mariano Baraglia, *Evolução das Comunidades Eclesiais de Base*, Editora Vozes, Petrópolis, 1974; Álvaro Barreiro, *Comunidades Eclesiais de Base e evangelização dos pobres*, Edições Loyola, São Paulo, 1977; Frei Betto, *O que é Comunidade de Base?*, Editora Brasiliense, São Paulo, 1981; Clodovis Boff, *Comunidade eclesial, comunidade política: ensaios de eclesiologia política*, Vozes, Petrópolis, 1978. En Alves (1984: 230-236) se encuentra una apretada, excelente síntesis.

¹¹ No debe olvidarse que la demanda de justicia social es parte de las definiciones políticas adoptadas por la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) reunida en Medellín, en 1968. Es bueno tener en cuenta que cuando se habla de la IC brasileña no se está haciendo referencia a una institución homogénea sino, en rigor, a sus sectores "progresistas", que son mayoritarios dentro de ella, pero no dejan de haber "moderados" e incluso conservadores.

moradores, favelados, campesinos y trabajadores rurales, obreros industriales sindicalizados. La cuarta etapa, a partir de la ley de reforma partidaria de 1979, es la de discusión y acción políticas dentro de los nuevos partidos, lo cual quiere decir, en primer lugar, el *dos Trabalhadores* (PT).

La IC brasileña no es sólo la iglesia católica con la mayor cantidad de fieles en el mundo, un dato no desdeñable dentro de la estrategia vaticana, sino que es, precisamente, parte de una institución internacional planetaria. Tal carácter le permite situarse, como bien señala Souza Lima, en condiciones de promover simultáneamente: 1) "un amplio apoyo político internacional a la lucha democrática brasileña", parte del cual se aprecia en las sesiones del Tribunal Russell reunido en Roma; 2) "un gran interés (por lo menos europeo) en acompañar el proceso brasileño, transformando así algunas figuras políticas internas en líderes de expresión internacional"; 3) "el refuerzo de los nuevos modelos de acción practicados internamente" [pastorales, CEBs, etc.], por los cuales se aprecia un creciente interés por parte de "amplios sectores del catolicismo internacional", algunos de los cuales los ponen en práctica aun en contextos nacionales bien diferentes de los originarios; 4) "la captación permanente de recursos financieros y materiales en el exterior para mantener sus nuevas opciones pastorales, lo que le permitirá una independencia del Estado y una vulnerabilidad menor a las presiones «internas» ejercidas por las clases sociales dominantes y por sus propios segmentos conservadores" (Souza Lima, 1985: 47).

Por cierto, la IC brasileña no deja de pagar un costo por su decidida acción antidictatorial, particularmente en 1969 y 1976, años en que se produce una fuerte acción represiva sobre el clero por parte de grupos paraestatales y privados o, incluso, explícitamente militares (como en el caso de la PUC/SP, éste en 1977). Skidmore (1988: 273 y 360) señala, por ejemplo, que en 1969 es asesinado, en Recife, el sacerdote Pereira Neto, estrecho colaborador de Helder Câmara, mientras se producen varios casos de amedrentamiento, detención, golpizas y allanamientos (los que incluyen escuelas y conventos). Entre los presos hay, por lo menos, una monja (la madre superiora de un convento) y un obispo (el de Volta Redonda, en el estado de Rio de Janeiro). En 1976 se registran los asesinatos de un misionero alemán (Rodolfo Lunkenbein) que trabajaba con indígenas de la Amazonia, crimen a cargo de hacendados, y el de otro sacerdote de la misma región (João Bosco Penido Burnier), conocido por su lucha en defensa de mujeres torturadas, crimen cometido por policías; el secuestro, por un grupo no identificado, de Dom Adriano Hypolito, obispo de Nova Iguaçu, en la periferia de Rio de Janeiro, a quien luego apalean, desnudan y arrojan a la calle, mientras su automóvil es estacionado y hecho explotar frente a la sede de la CNBB. La enérgica protesta de ésta por el ataque y vejamen al obispo nunca tendrá respuesta satisfactoria por parte de las autoridades.

Es posible sostener que el estratégico papel jugado por la Iglesia Católica brasileña se ha potenciado aún más por a) la atinada decisión de no permitir "que surgiese o se desenvolviese la hipótesis política del «partido católico»" en el país y b) la práctica de la tolerancia política y religiosa observable en las diversas instituciones creadas o fortalecidas por ella, tales como las Comunidades Eclesiásticas de Base, las Comisiones para los Derechos Humanos, las diversas Pastorales y otras. Es esa tolerancia la que permite (y explica) la presencia de "agentes" de otros credos e incluso no religiosos (Souza Lima, 1985: 47).

El general no tiene quien le escriba

Por lo menos, a favor. Porque en contra, sí tiene... y bastante. Sin embargo, la oposición generalizada de la prensa a la dictadura no aparece sino con considerable retraso, puesto que los grandes diarios -con excepción de *Última Hora*- han acompañado la campaña contra el presidente Goulart y el golpe de 1964. El primer viraje hacia la oposición comienza con las denuncias de actos arbitrarios y torturas cometidos bajo el gobierno Castelo Branco, campaña que inician aquel medio (opositor) y *Correio da Manhã* (hasta entonces partidario del golpe), campaña que lleva a una momentánea suspensión de la aplicación de tormentos.¹² El segundo viraje está representado por la lucha contra la censura, que el gobierno intensifica a partir de setiembre de 1972 (entre los asuntos de tratamiento prohibido se cuentan las actividades de los organismos de seguridad y las discusiones sobre la sucesión presidencial). Los principales blancos de los censores son el diario *O Estado de S. Paulo* (conservador), los semanarios *Movimento* (de izquierda), *Opinião* (centro-izquierda), *O São Paulo* (de la arquidiócesis) y *Veja* (de centro), la principal revista de opinión del país. Un capítulo especial de la prensa brasileña bajo la dictadura es la del semanario satírico *Pasquim*, otro de los grandes objetivos de la censura y persecución (que incluye la prisión de todo su equipo, durante un mes, en 1970).

Como en otras acciones represivas, es durante el gobierno del general Médici cuando se intensifica la persecución de la prensa: prisión o tortura de periodistas, presiones (o incentivos) sobre los propietarios de los diarios, censura directa... La exacerbación de ésta obra como un poderoso estímulo para la lucha por la libertad de prensa. El presidente Geisel -como parte de su estrategia de distensión- la deroga parcialmente en enero de 1975 (beneficia a los dos diarios de la familia Mesquita, *O Estado de S. Paulo* y *Jornal da Tarde*) y avanza otros pasos liberalizadores en 1977, al aflojar el control de los censores -aunque en contrapartida introduce otro nuevo sobre la información, sometiendo a censura los diarios, revistas y libros provenientes del exterior- y en 1978, al dejar sin efecto la censura previa. A comienzos de 1975, *Folha de S. Paulo* se torna un diario decididamente opositor, abriendo sus columnas de opinión a destacados enemigos del gobierno. En el último trimestre de ese mismo año, la prensa denuncia enérgicamente la muerte en prisión de uno de los suyos, Vladimir Herzog.¹³

La protesta de la prensa no se canaliza solamente a través de medios individuales, sino también -con mayor fuerza- de un modo orgánico, mediante la *Associação Brasileira da Imprensa* (ABI), una organización creada en 1931 por la fusión de todas las asociaciones de periodistas existentes por entonces. "Ella representa a la profesión como un todo -desde las empresas periodísticas hasta, individualmente, periodistas, editores y propietarios de diarios". Si bien carece de garantía legal de autonomía frente al Estado -a diferencia de la OAB-, la ABI actúa "como institución independiente" de él, en buena medida como expresión y prolongación de una larga tradición liberal. Hasta fines de 1968 -la promulgación del *Ato Institucional* nº 5 (AI-5)¹⁴-, la principal tarea de la ABI

¹² Una colección de artículos periodísticos que denuncian arbitrariedades, purgas y torturas puede verse en Thereza Cesário Alvim (ed.), *O golpe de 64: a imprensa disse não*, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1979.

¹³ No pretendo sintetizar la historia de las relaciones medios de comunicación/gobierno durante los años de la dictadura. Sólo destaco algunos datos consignados previamente, ordenándolos como parte del papel desempeñado por instituciones de la sociedad civil en el proceso de salida de la dictadura. Para mayor información puede verse, por ejemplo, Paolo Marconi, *A censura política na imprensa brasileira: 1968-1978*, Global, São Paulo, 1980.

¹⁴ El AI-5 es promulgado el 13 de diciembre de 1968 por el presidente Costa e Silva como reacción a la negativa del Congreso de votar el desafuero del diputado emebedista Márcio Moreira Alves, cuyo enjuiciamiento ha sido solicitado por el Poder Ejecutivo y los ministros militares por "insulto a las fuerzas armadas", acto considerado delito por la Ley de Seguridad Nacional. En verdad se trata de un proyecto en carpeta desde julio de ese año, preparado como reacción a las movilizaciones de estudiantes y trabajadores, a las huelgas de éstos y al apoyo que a una y otras presta la clase media, y hecho efectivo con el pretexto del desaire legislativo. El AI-5 concede amplios poderes al Ejecutivo, varios de ellos ya dispuestos por AI anteriores, y establece el carácter permanente de los controles gubernamentales y la suspensión de las garantías constitucionales. Entre otras atribuciones conferidas al presidente se encuentran las de: cerrar el Congreso Nacional, las Asambleas Legislativas estatales y las Cámaras Municipales; casar mandatos electorales de miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres niveles; suspender por diez años los derechos políticos de los ciudadanos y restablecer el

se reduce a la defensa de los periodistas amenazados y, sobre todo, a acciones "educativas" internas (conferencias, debates, sesiones de estudio), procurando una mayor capacitación de sus miembros. Desde 1969, en cambio, pasa a tener un papel protagónico en la lucha contra la censura, sin abandonar aquellas tareas; se torna, así, un creciente y activo foro de rechazo a los controles y amputaciones de la libertad de opinión y de pensamiento. Coordina "las actividades de grupos de oposición preocupados con la libertad de expresión, canalizándolas para el terreno de la política formal", presionando directamente sobre el Estado, acción que contribuye al aflojamiento y finalmente la derogación de la censura, tras diez años de aplicación. Con ella, la prensa asume un importante papel en las fases de distensión y apertura, publicando artículos de críticas al modelo económico, denunciando los casos de torturas de detenidos y los de corrupción de altos funcionarios del gobierno y exigiendo las investigaciones del caso, el fin de la violencia y las reformas políticas que permitan el tránsito a la democracia. Con ese proceder también contribuyen a erosionar la cultura del miedo (Alves, 1984: 212-217).

Hombres de ley

Otra organización de la sociedad civil que desempeña un papel clave en la salida de la dictadura es la *Ordem dos Advogados do Brasil* (OAB), institución creada en 1930 (primera asociación profesional del país). Mas no es una mera instancia de defensa corporativa de sus miembros, los abogados, sino que tiene una condición legal que le asigna la misión de defender la armonía jurídica y la aplicación de la Constitución Federal. Su estatuto es curioso, *sui generis*, pues es parte de la administración estatal indirecta, pero goza de autarquía y descentralización, establecida por la ley nº 4.215 (art. 139), que la exime de las normas y disposiciones legales que sobre el particular se aplican a otros órganos del Estado. Esa particular situación le coloca en una excelente posición para la efectiva defensa de los derechos humanos.

En el principio -esto es, en 1964-, la OAB se cuenta entre los celebrantes del golpe militar, mas a partir de 1968 suma su protesta a la tibia oposición de entonces y crecientemente intensifica su acción en favor de la democratización.¹⁵ La ilegitimidad y hasta la ilegalidad de numerosas acciones de organismos estatales encargados de la represión, particularmente en materia de derechos humanos, sistemáticamente violados, lleva a los abogados a una situación difícil, por un lado, y de vanguardia, por el otro. Difícil, porque el elemental derecho de defensa de cualquier detenido político se convierte en un acto de riesgo, por añadidura de escasa efectividad (a menudo sólo la obtención de informes sobre el paradero de un detenido). De vanguardia, porque su reacción "a las groseras transgresiones de los derechos del hombre" se transforma en "un verdadero test de la tradición brasileña de respeto por la ley" (Skidmore, 1988: 364) y, por extensión, en una lucha por la efectiva vigencia de

"*estatuto dos cassados*"; dimitir, remover, jubilar o poner en disponibilidad a empleados de las administraciones públicas de los tres niveles; dimitir o remover jueces, para lo cual el Acto suspende las garantías de la condición vitalicia, inamovible y estable de los miembros del Poder Judicial; decretar el Estado de Sitio; remitir a tribunales militares a los acusados de crímenes políticos, los que son privados de derecho a recursos; legislar por decreto... El AI-5 no tiene plazo de vigencia, la cual queda sujeta al arbitrio del presidente, quien, para derogarlo, debe dictar un decreto específico. Se extiende, así, hasta 1979, cuando Geisel lo deja sin efecto.

¹⁵ Está claro que los abogados no constituyen, tampoco ellos, un grupo homogéneo: si bien muchos juegan un decisivo papel en la defensa de los derechos humanos y un orden jurídico legítimo, no son pocos -incluyendo algunos de gran prestigio- los que son partícipes de la creación de un orden legal pero ilegítimo. A su vez, varios de éstos, particularmente connotados juristas de filiación udenista, se preocupan, como dice Skidmore (1988: 364), por el creciente autoritarismo del régimen y se alejan de sus posiciones. La actuación de la OAB durante su primer medio siglo de historia puede verse en una publicación oficial de la organización: Alberto Venâncio Filho, *Notícia histórica da Ordem dos Advogados do Brasil, 1930-1980*, Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, 1982. El papel de estos profesionales en pro del restablecimiento del Estado de Derecho es estudiado, según informa Skidmore, por James A. Gardner, *Legal Imperialism: American Lawyers and Foreign Aid in Latin America*, University Wisconsin Press, Madison, 1980, pp.109-125. Pueden verse también, Luiz Jorge Werneck Viana, "A OAB como intelectual coletivo: 1964-1980", Relatório de Pesquisa, IUPERJ, Rio de Janeiro, 1984, y "Os intelectuais da tradição e a modernidade: os juristas-políticos da OAB", en Maria Susana Arrosa Soares (coord.), *Os intelectuais nos processos políticos da América Latina*, Editora da Universidade, UFRGS, Porto Alegre, 1985, pp. 191-224.

aquéllos, la derogación de la legislación represiva y por el "esclarecimiento de la opinión pública sobre cuestiones legales y derechos públicos o civiles" (Alves, 1984: 210). La actuación de los abogados es también importante para el "establecimiento de los límites entre el cuadro jurídico legítimo -el de las leyes promulgadas por el Congreso de acuerdo con la Constitución- y un sistema jurídico paralelo e ilegítimo -el de las leyes de excepción impuestas por el Ejecutivo a partir de 1964 sin la aprobación del Congreso" (*ibidem*). Precisamente, Alves añade que "la contribución más importante en términos políticos" realizada por la OAB quizás sea "el cuestionamiento de la legitimidad de la estructura legal del Estado de Seguridad Nacional", ese sistema paralelo al cual la Orden denomina, sin eufemismo, "sistema legal ilegítimo".

Luiz Werneck Vianna sostiene la hipótesis de un accionar de la OAB basado en un conflicto entre la modernización autoritaria y la tradición jurídica, en un contexto que -sobre todo a partir de las elecciones de 1974, en las que triunfa la oposición- muestra la emergencia de nuevos movimientos sociales que asocian "la lucha por sus reivindicaciones inmediatas con las luchas generales por la democracia". Según él, los juristas, especialmente la fracción de los juristas-políticos, -una élite excluida "de la conducción de la modernización, con sus valores y cultura específicos"- chocan con el régimen, choque que a partir del AI-5 se torna un verdadero "cisma sin solución".¹⁶ En 1972, en su convención nacional reunida en Curitiba, la OAB proclama que "la causa de mayor importancia para nuestro país es el primado del Derecho" y enfatiza el pronunciamiento ya opositor expresando: "No hay la mínima razón para tener como necesario el sacrificio de los principios jurídicos en el altar del desarrollo, pues el legítimo progreso económico y social sólo se hará en consonancia con los principios del Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales del hombre. Si es verdad que para el desarrollo son indispensables paz y seguridad, no es menos verdad que no existe tranquilidad y paz cuando no hay libertad y justicia". En agosto de 1976, en la convención de Rio de Janeiro -convocada bajo la consigna "El abogado y los derechos del hombre"-, la organización acuerda comprometerse activamente en la lucha por éstos, por lo cual se empeña en una campaña de educación pública acerca de la importancia que ellos tienen para cada ciudadano. Ahora, sin descuidar la campaña sobre la ilegitimidad de los gobiernos militares, se persigue un triple objetivo: el restablecimiento del derecho de *habeas corpus*, la derogación del AI-5 y la amnistía.

Ya por entonces, el gobierno de Geisel se encuentra manifiestamente enconado con la OAB. Si en 1974 el ministro de Justicia, Armando Falcão, se niega a asistir a la sesión de clausura de la convención nacional, en 1976 se lanza a una ofensiva contra la Orden procurando -dentro del proyecto de reforma del sistema judicial- quitarle su autarquía y someterla a control del ministerio del Trabajo. Si bien no tiene éxito, la respuesta es un endurecimiento mayor de la Orden, que a sus anteriores demandas en favor del restablecimiento de un orden jurídico legítimo añade la necesidad de convocar a una asamblea constituyente encargada de redactar una nueva Carta Magna, ella sí, a diferencia de la de 1967, legítima.

En agosto de 1977, con motivo del sesquicentenario de la enseñanza del derecho en Brasil, el doctor Goffredo da Silva Telles, profesor de la USP e ilustre jurista, da a conocer una "Carta a los brasileños", en la cual reclama la inmediata redemocratización del país y el retorno al imperio de la ley. La primera reacción es una manifestación de 3.000 paulistas marchando por las principales calles de la ciudad en su apoyo, sin intervención policial. En mayo de 1978 la convención nacional de la OAB vuelve a reunirse en Curitiba, debatiendo entonces la cuestión de la supremacía de la ley y sus implicancias; al concluir la reunión se aprueba una "Declaración de los abogados brasileños" que reclama volver al Estado de Derecho, elaborar una nueva y legítima constitución, conceder la amnistía a los presos políticos y revisar completamente la legislación laboral. Al concluir el mismo año, la OAB también protesta por la aprobación de la Enmienda Constitucional nº 11, plena de artilugios para

¹⁶ Luiz Werneck Vianna, "Os intelectuais da tradição e a modernidade...", *op. cit.*, págs. 223 y 220.

reintroducir la facultad gubernamental de reprimir arbitrariamente que se abolía con la derogación del AI-5.

En el interior del país, la OAB utiliza sus propios canales de comunicación para difundir sus posiciones y demandas, muchas de las cuales lleva adelante con la Iglesia Católica y la AIB. No obstante, las dificultades para llegar a grandes mayorías no son fáciles de resolver, especialmente porque los medios audiovisuales (radio y TV), los más efectivos en una sociedad con elevadas tasas de analfabetismo, están bajo fuerte control gubernamental. La Orden también aprovecha sus conexiones internacionales para agitar la situación del país en el exterior, donde encuentra oídos receptivos en *Amnesty International*, el *International Committee of Jurists*, el Departamento de Estado norteamericano (bajo la administración Carter).¹⁷

La OAB se integra con miembros de la élite, escribe Maria Grossi. Es tradicionalmente, al igual que la IC, una organización conservadora, anota Thomas Skidmore. Pero nada de ello le impide pasarse a las filas de la más combativa oposición al régimen, especialmente a partir de 1974. Como bien dice el norteamericano, es la confrontación con el Estado autoritario la que vuelve radicales a los abogados. Es, si se prefiere decirlo como Maria Helena Moreira Alves, otro resultado producido por la dialéctica de la lucha entre el Estado de Seguridad Nacional y la oposición. Tanto que, en ocasiones, es desde el propio poder que se lanzan mensajes a la OAB para insistir y endurecer sus demandas, como lo hace, por ejemplo, Petrônio Portella, ministro de Justicia que sucede a Falcão en el gobierno Geisel, quien en 1978 pide a Raymundo Faoro, por entonces presidente de la Orden, que agite la cuestión del reclamo de amnistía como un elemento necesario para avanzar en la liberalización política.

La lucha de la OAB por el imperio del derecho -y en particular por los derechos humanos- puede explicarse bien desde una perspectiva como la de Jean Cohen y Andr Arato, para quienes "la moderna sociedad civil no puede ser institucionalizada sin la reafirmación política de los derechos a través del derecho positivo". Según ella, los derechos fundamentales forman un basamento institucional que permite desplegar la acción colectiva. Más aún, tienen una dimensión constituyente de lo social *qua* sociedad civil, y si bien garantizan "jurídicamente lo social frente a potenciales amenazas por parte del poder político (o económico), (...) su efectividad está dada por la existencia de un poder estatal dispuesto a hacerlos respetar y por la presencia de una cultura de autolimitación en la sociedad civil".¹⁸

La clase obrera va al paraíso

Los militares brasileños tienen, comparados con sus pares de Uruguay, Argentina y Chile, una tarea menos complicada para reprimir al movimiento obrero, en buena medida en razón de su menor nivel de organización y autonomía. El primer operativo represivo se realiza en 1964 y el segundo, como ya vimos, en 1968. En ambos casos, uno de los resultados de la represión, en particular después de las huelgas de Contagem y Osasco, es la continuidad de los controles corporativos, establecidos por la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CAT), y de los dirigentes *peleguistas*, unos y otros heredados del varguismo y ahora reforzados por la Doctrina de la Seguridad Nacional y su secuela de triple vigilancia a cargo del ministerio del Trabajo, la policía y el ejército.¹⁹ En ese contexto, las posibilidades de reacción del movimiento obrero son virtualmente nulas, al menos

¹⁷ Sobre la incidencia de la cuestión de los derechos humanos en la relación entre los gobiernos de Brasil y Estados Unidos, puede verse una reseña en Skidmore (1988: 304-308, 375-385).

¹⁸ La primera cita entrecomillada pertenece a Jean Cohen y Andr Arato, *Civil Society and Political Theory*, MIT Press, Cambridge, 1992, p. 413; la segunda, a un texto borrador de Enrique Peruzzotti, "Sociedad civil, Estado y derecho en Argentina", Buenos Aires, 1994, policopiado, p. 16.

¹⁹ *Pelego* es la piel de carnero con la lana, empleada para cubrir y adornar las ancas del caballo (gualdrapa), pero en el lenguaje popular e incluso en el científico-social designa al dirigente sindical que actúa como portavoz y/o partidario, cuando

por fuera de las estructuras oficiales. Precisamente, lo que hará la nueva generación de sindicalistas, en particular en el Grande São Paulo (el centro industrial brasileño), es actuar dentro de ellas, generando un efecto no querido por los mentores estatales. Una parte de esa acción procura y a menudo obtiene beneficios adicionales apelando a la intervención de los tribunales del trabajo, un órgano clave de la antigua estructura corporativista y paternalista, es decir, mediante la concesión del Estado, no de la patronal. La sindicalización no deja, así, de crecer: pasa de 1.448.151 afiliados en 1964 a 1.952.752 en 1969, 2.930.672 en 1974 y 5.139.566 en 1979 (trabajadores urbanos), a los cuales deben sumarse los rurales, que son 3.008.943 en 1974 y 5.098.522 en 1979, lo que eleva el total de trabajadores sindicalizados a 5.939.615 y 10.238.088, respectivamente (según datos en Alves, 1984: 242-243).

Es bueno tener en cuenta que pese a su formidable crecimiento, los sindicalizados no superan, hacia los 1980, el 50 % de la población económicamente activa del país. Por otra parte, significativamente, el porcentaje de proletarios industriales sindicalizados se mantiene estable en relación al total de la población económicamente activa en la industria, ubicándose por debajo del cuarto (alrededor del 23 %), como lo indica Maria Hermínia Tavares de Almeida al analizar el período 1960-1978.²⁰

Paul Drake vincula el renacimiento de la acción obrera independiente del Estado con la detención del crecimiento económico -el fin del "milagro"- y la reaparición de la recesión y la inflación, coincidentemente con la política de distensión del gobierno Geisel. Especialmente en las fábricas de las nuevas y modernas industrias paulistas -sostiene- ha crecido, ajeno a organizaciones y partidos oficiales, un movimiento de bases. Aunque no llegan a alcanzar sus objetivos concretos, huelgas masivas encabezadas por trabajadores metalúrgicos de las fábricas automotrices, de capital extranjero, y por su carismático dirigente Luiz Inácio da Silva ("Lula"), resucitan las políticas del movimiento obrero", devenidas "un desafío nuevo debido a sus empleos estratégicos y a su ausencia de lealtad hacia antiguos partidos y agencias corporativistas". El salto adelante de los nuevos sindicatos es simultáneo con el de los partidos políticos. Antes del golpe, los vínculos entre los trabajadores y los partidos progresistas habían sido precarias; luego de él, desaparecen las conexiones con los populistas. Al concluir los setenta, la nueva dirigencia sindical mantiene sus "recelos frente a los antiguos partidos de oposición, tanto como frente al gobierno y a los sindicatos oficiales", lo cual les lleva a promover una "mayor autonomía del movimiento de trabajadores para evitar trampas populistas o corporativistas" y, finalmente, a crear, "junto con algunos intelectuales, su propio pequeño pero renovador Partido de los Trabajadores", mientras otros obreros, en particular los comunistas, continúan "votando por la amplia oposición oficial, el Movimiento Democrático Brasileño", que ha absorbido a muchos miembros del desaparecido *trabalhismo* (Drake, 1989: 132-133).

El llamado *novo sindicalismo* es parte del proceso de transformación societal generado por la política económica de la alianza entre la tecnoburocracia estatal, la burguesía local y el capital extranjero. Es por ello que él surge y se afirma en los nuevos y más dinámicos sectores de la economía (metalurgia, siderurgia,

no un agente más o menos disfrazado, de la política del Ministerio del Trabajo, antes que de las posiciones de sus representados. Gomes y D'Araújo dicen que en la historiografía del sindicalismo brasileño hay consenso en considerar al *pelego* "como un trabajador 'seducido' o incluso 'vendido' al poder del Ministerio del Trabajo, actuando, como la piel del carnero, como un 'suavizante' de las fricciones, o, en una visión más cruda, como una especie de traidor de la clase trabajadora" (Angela de Castro Gomes, y Celina D'Araújo, *Getulismo y trabalhismo*, Editora Ática, São Paulo, p. 78). El *peleguismo* aparece en la historia social y política brasileña en la década de 1930, como parte de la política de cooptación de las direcciones obreras por el Estado y del proceso de burocratización sindical. Se afirma durante la fase populista y persiste durante la dictadura, comenzando a ser erosionado desde fines de la década de 1970 (y sobre todo durante la de 1980) con la aparición del *novo sindicalismo*.

²⁰ Maria Hermínia Tavares de Almeida, "O sindicalismo brasileiro entre a conservação e a mudança", en Bernardo Sorj y Maria Hermínia Tavares de Almeida (Org.), *Sociedade e política no Brasil pós-64*, Editora Brasiliense, São Paulo, 1982, cuadro 2, p. 193.

petroquímica, autopartes, equipos eléctricos) y en menor medida en los intermedios (cerámica, vidrio, papel, minería). Las nuevas industrias establecen formas de relación obrero-patronal diferentes de las tradicionales, permitiendo a los obreros superar el encorsetamiento legal constituido por la CAT y, muy importante estratégicamente, afirmarse en el trabajo con las bases en la propia fábrica. A su vez, la política económica del nuevo modelo capitalista no sólo genera un formidable crecimiento cuantitativo de la fuerza de trabajo industrial (de 1.500.000 a 4.700.000 de proletarios entre 1960 y 1980) y un desplazamiento de los trabajadores por cuenta propia en favor de los asalariados (los primeros caen de 50 a 30.1 % de la fuerza de trabajo, los segundos ascienden de 47.9 a 66.7 % de la misma, entre ambos años), sino también un incremento del proceso de urbanización (la población residente en ciudades de más de 20.000 habitantes pasa del 19.9 al 50.6 % entre 1950 y 1980), con todos los cambios cualitativos conexos.²¹ Entre tales cambios deben señalarse los que hacen a una intensa movilidad social, dentro de la cual se constata una creciente participación de la mujer (especialmente notable en el plano de la educación superior) y, *contrario sensu*, un virtual mantenimiento de las desiguales posibilidades para la población negra y mulata (de ambos sexos). El modelo económico, en fin, provoca tanto un alto crecimiento de la riqueza, cuanto una muy desigual distribución de ella, ampliando la brecha que separa a los muy ricos y ricos y los pobres y muy pobres.

La forma corporativa de la organización sindical restringe, legalmente, el ámbito de acción al espacio geográfico municipal, impidiendo la interconexión entre los sindicatos de una misma rama ubicados en diferentes ciudades (fragmentación horizontal). Ello se aprecia claramente en el caso de los sindicatos metalúrgicos de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema (el ABCD paulista) y São Paulo, tan próximos entre sí geográficamente. No obstante, esa situación negativa para la organización obrera se convierte en una condición que hace posible la aparición de nuevos dirigentes sindicales estrechamente vinculados a sus bases, como también de novedosas formas de lucha, entre ellas la denominada *greve branca* (huelga blanca) o, en otro plano, la apelación a los informes del Banco Mundial para contrarrestar los índices inflacionarios (más bajos) dados por el gobierno (asunto para nada meramente estadístico, pues es según ellos que se fijan los reajustes salariales).

La primera gran huelga del *novo sindicalismo* -una *greve branca*- se produce en mayo de 1978, en la fábrica de ómnibus y camiones Saab-Scania, en São Bernardo do Campo, cuyos trabajadores pertenecen al sindicato de metalúrgicos. Bajo la dirección de Luiz Inácio da Silva, Lula, 100 de ellos se presentan en la planta, marcan la tarjeta de entrada, se ubican frente a su respectiva máquina y se cruzan de brazos frente a ella, la que permanece sin operar (táctica de "brazos cruzados, máquinas paradas"). La patronal no dispone de medios para sacar a los obreros de su lugar, la policía no puede intervenir pues no hay piquetes de huelga en el exterior de la planta. La totalidad de los 1.800 proletarios de esta empresa se adhiere a la huelga. Al cabo de una semana se suman los de otras 23, abarcando 3 ciudades y 60.500 huelguistas. El ejemplo y la lucha se expanden: entre el 12 de mayo y el 13 de julio de 1978 hay 213 fábricas, ubicadas en 9 ciudades (entre ellas las 4 del ABCD), y 245.935

²¹ El *novo sindicalismo* brasileño ha sido objeto de innumerables trabajos y análisis. Entre ellos pueden citarse: Laís Wendel Abramo, "Empresários e trabalhadores: novas idéias e velhos fantasmas", en *Cadernos do CEDEC*, N° 7, São Paulo, 1985, y en Comisión de Movimientos Laborales (CLACSO), *El sindicalismo latinoamericano en los ochenta*, Santiago, 1986, pp. 121-32; Maria Hermínia Tavares de Almeida, "Desarrollo capitalista y acción sindical", en *Revista Mexicana de Sociología*, año , n° 2, México DF, abril-junio 1978, y "Sindicalismo brasileiro e pacto social", en Comisión de Movimientos Laborales (CLACSO), *El sindicalismo latinoamericano en los ochenta*, op. cit., pp. 103-119; John Humphrey, *Capitalist Control and Workers Struggle in the Brazilian Auto Industry*, Princeton University Press, Princeton, 1982; Margaret Keck, "El nuevo sindicalismo en la transición en Brasil", en *Estudios Sociológicos*, vol. 5, n° 13, México DF, enero-abril de 1987; Marcia de Paula Leite e Roque Aparecido da Silva (comps.), *Modernização tecnológica, relações de trabalho e práticas de resistencia*, Iglu/ILDES/Labor, São Paulo, 1991; José Alvaro Moisés, "A estratégia do novo sindicalismo", en *Revista de Cultura & Política*, n° 5-6, CEDEC/Paz e Terra, São Paulo, abril-setembro 1981; Luís Flávio Rainho e Osvaldo Martines Bargas, *As lutas operárias e sindicais dos metalúrgicos em São Bernardo: 1977-1979*, FG, São Bernardo, 1983; Leôncio Martins Rodrigues, *Trabalhadores, sindicatos e industrialização*, DIFEL, São Paulo, 1974; Bernardo Sorj e Maria Hermínia Tavares de Almeida (Org.), *Sociedade e política no Brasil pós-64*, Editora Brasiliense, São Paulo, 1983. En la revista *Dados*, vol. 24, n° 2 y vol. 26, n° 3, IUPERJ, Rio de Janeiro, 1981 y 1983, pueden verse los artículos de Bolívar Lamounier, Amaury de Souza, Maria Hermínia Tavares de Almeida y Luiz Werneck Vianna.

trabajadores en huelga. No sólo eso: con su acción, los metalúrgicos bernardinenses desencadenan "una de las mayores olas de huelgas de la historia del país": en 1978, 24, abarcando a 539.037 trabajadores (357.043 metalúrgicos), en 1979, 113, con un total de 3.207.994 huelguistas, entre los cuales 958.435 metalúrgicos, 752.000 docentes primarios y secundarios, 443.160 transportistas urbanos, entre otros; en 1980, 50 huelgas y 664.700 huelguistas (244.500 metalúrgicos). Significativamente, hay también una importante participación de los trabajadores rurales: 1.200 (1 huelga) en 1978, 90.162 (3 huelgas) en 1979, 240.000 (1 huelga) en 1980 (Alves, 1984: 253-254 y 264).

La primera conquista obrera se alcanza el 31 de mayo, cuando representantes patronales y del Sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema, tras una negociación colectiva de hecho, firman un acuerdo según el cual los salarios serán reajustados un 24,5%, de manera escalonada hasta febrero de 1979. Más allá del acuerdo salarial, resultados más significativos se producen en planos aún más decisivos: 1) se rompe la política salarial del gobierno, toda vez que los reajustes escalonados se aproximan a la demanda obrera de los incrementos trimestrales, de manera tal que los salarios se adecuen a los índices de la inflación; 2) se rompe el corset de la legislación represiva de la huelga "mediante acciones decididas y unitarias de los trabajadores", las que obligan al gobierno a considerar sus demandas; 3) las empresas pueden ser llevadas a negociaciones colectivas independientes (*idem*: 249).

En una entrevista con Maria Helena Moreira Alves, Lula le dice que esta huelga es consecuencia del grado de madurez organizativa alcanzado por la clase obrera, dentro del cual se incluye la constatación de (a) la mayor facilidad para negociar con la patronal si las máquinas se encuentran paradas y (b) el valor de la huelga como principal arma de negociación. No obstante, como añade el propio Lula, los patrones también aprenden: en noviembre de 1978 definen una estrategia para enfrentar el tipo de huelga ensayado en mayo, apelando a la suspensión de las refecciones y a medidas para forzar a los trabajadores a abandonar la planta; ya fuera de ella, la policía puede actuar en caso de eventuales disturbios. "De modo que después de 1978 en São Paulo no pudimos usar más la estrategia de las huelgas dentro de las fábricas". Cuando los patrones encuentran una respuesta, las huelgas se redefinen: así, las de 1979 vuelven a la calle, facilitando la acción represiva de la policía sobre los piquetes, manifestantes y locales sindicales, y con ella el desestímulo. En el ABCD, después que la asamblea de metalúrgicos vota la huelga, el gobierno responde interviniendo los tres sindicatos, lo que lleva a la IC a ofrecer, a modo de "cuartel general sindical" provisorio, la catedral de São Bernardo. Empero, el gesto no alcanza a compensar la pérdida de los locales propios, a la cual se suma la represión policial. La consecuencia es una revisión del plan de lucha, resolviendo una nueva asamblea levantar el paro y aceptar una tregua de 45 días para entablar negociaciones. Éstas concluyen otorgando a los obreros un incremento salarial del 63%, al tiempo que el gobierno reintegra los locales sindicales.

No es del caso ocuparse aquí de la ola de huelgas de 1978-1980, puesto que su tratamiento detallado escapa a los alcances de este trabajo, pese a su obvia importancia en la historia reciente de la sociedad brasileña. Me interesa sí, en cambio, destacar algunos puntos que guardan relación con la movilización de la sociedad civil contra la dictadura.²²

En primer lugar, las huelgas no sólo permiten a los trabajadores tomar conciencia de su fuerza y de su poder, sino también -a partir de 1979- generar una red de solidaridades entre fuerzas opositoras: por un lado, una alianza entre organizaciones de base, movimientos sociales ligados a la IC (incluso las CEBs) y nuevos

²² Amén de la bibliografía ya señalada, una reseña de las huelgas de ese trienio puede verse en Alves (1984: 240-266 y Apéndice, cuadros 10, 11 y 12, en pp. 341 y ss., sin numerar).

sindicatos; por el otro, una articulación entre éstos y organizaciones de la "oposición de élite", es decir, la IC, que en 1980 ya se encuentra "profundamente comprometida con los metalúrgicos", la OAB y el MBD. El fondo de huelga creado en 1980, con sede en la catedral de São Bernardo do Campo, es un buen ejemplo del funcionamiento orgánico y solidario de esas instituciones de la sociedad civil, permitiendo distribuir 36 toneladas de alimentos entre los 200.000 huelguistas y sus familias a lo largo de las 6 semanas de huelga. Una tarea conexa es el trabajo realizado en los barrios para impedir la salida domiciliaria de rompehuelgas, evitando la recurrencia a los clásicos (y peligrosos) piquetes en puerta de fábrica. Igualmente importante es la asistencia jurídica brindada a los huelguistas por abogados vinculados a la IC, entre ellos los de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis paulista, y la protección (relativa) brindada por diputados y senadores del MDB recurriendo a sus inmunidades parlamentarias (Alves, 1984: 261-262).

La huelga de 240.000 trabajadores de plantaciones de caña de azúcar, en Pernambuco, es otro ejemplo de esa red de solidaridades. En este caso, el funcionamiento de ella es más complicado, pues el espacio geográfico huelguístico es más extenso y fragmentado, tanto que para llevarla adelante es necesario coaligar el accionar de 42 sindicatos rurales, buen número de CEBs y la Pastoral de la Tierra, la responsable del planeamiento de la lucha.

En segundo lugar, las huelgas tienden a ser crecientemente organizadas, esto es, menos espontáneas, situación que implica un incremento cualitativo del contenido de las demandas, que tienden a superar la barrera del mero reclamo de reajustes salariales y a incluir las referidas a estabilidad en el empleo, readmisión de despedidos, reducción de la semana de trabajo, control obrero de la selección de los jefes de sección, reconocimiento de la representación sindical en las fábricas (comisiones internas, delegados), libre y garantizado derecho de los representantes sindicales para acceder a las fábricas, control obrero de los fondos gubernamentales, respeto de los derechos humanos, entre otras. Como se aprecia, ellas van más allá del plano económico y se proyectan decididamente en el político.

En tercer lugar, entonces, el *novo sindicalismo* se politiza. La politización es el resultado convergente de varios elementos, en buena medida generados por la propia dinámica de la lucha obrera y la triple dialéctica entre ésta y los empresarios, el Estado y la sociedad en su conjunto. Una primera enseñanza de las huelgas de 1979 es la necesidad de superar una estructura organizativa excesivamente dependiente de liderazgos de primera línea - entre los cuales descuella largamente el del migrante nordestino devenido proletario y presidente del sindicato metalúrgico de São Bernardo do Campo y Diadema, Luís Inácio da Silva, más conocido como Lula²³- y crear niveles intermedios y direcciones de huelga alternativas. La expansión de la ola huelguística provoca un problema adicional a los nuevos sindicalistas surgidos del ABCD paulista, conocidos como *auténticos*, en oposición a los *pelegos*. En efecto, la multiplicación de su lucha en diferentes lugares del país se traduce en un considerable número de huelgas espontáneas, entre cuyas primeras acciones no son escasos el desconocimiento de la dirección sindical oficial y la solicitud de ayuda a los auténticos para resolver problemas de organización y entrenar cuadros aptos para enfrentar las nuevas condiciones. Alves cita el caso de la violenta huelga de obreros de la construcción de Belo Horizonte (1979), quienes expulsan al interventor oficial del sindicato y requieren la colaboración de aquéllos: "Lula, Jacó Bittar, Olivio Dutra y otros líderes sindicales de diferentes estados tuvieron que crear rápidamente una estructura organizativa alternativa" (1984: 259). He ahí un dato adicional relevante: el *novo sindicalismo* está rompiendo la fragmentación horizontal impuesta a la acción obrera por la estructura y la legislación corporativas y proyecta algunos de los nuevos liderazgos a una dimensión que excede los marcos del

²³ Para los comienzos de las actividades e ideas sindicales y políticas de Luis da Silva puede verse Mário Morel, *Lula, o metalúrgico*, Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1981.

sindicalismo y alcanza incluso el nacional.²⁴

La politización de un considerable sector del movimiento obrero lleva a una importante discusión acerca de su definición partidaria, en buena medida favorecida por la ley de 1979 que restaura el pluripartidismo.²⁵ De allí resulta el proyecto que culmina en la creación del *Partido dos Trabalhadores* (PT). El embrión se encuentra en la intención formulada por Lula ya entre mayo y julio de 1978, dándose un paso concreto con la divulgación de una carta de principios el 1º de mayo de 1979. El anteproyecto partidario, del 29 de enero de 1980, define al PT como un partido de clase, cuyo "objetivo es organizar políticamente a los trabajadores urbanos y rurales, (...) abierto a la participación de todas las capas asalariadas del país" y cerrado a la de los empresarios: "El PT rehúsa a aceptar en su interior representantes de las clases explotadoras. Vale decir, el Partido de los Trabajadores es un partido sin patrones!". La politización de una porción de la clase obrera y su traducción en el PT da cuenta de su pasaje del momento económico-corporativo al momento político, según la distinción gramsciana.

En cuarto lugar, la respuesta gubernamental a la ola huelguística es fluctuante. A veces opta por la prescindencia, que significa principalmente ausencia de represión policial; esa no intervención se observa incluso en huelgas que afectan a alto número de trabajadores, como la *greve branca* metalúrgica de mayo de 1978 en el ABCD (76.843), la de los trabajadores del transporte urbano de Rio de Janeiro (45.000), la de los conductores de taxis en 18 ciudades del país (40.000) o la muy masiva de docentes primarios y secundarios de las escuelas públicas de São Paulo (180.000), las tres en 1979. En otras ocasiones, la prescindencia del gobierno se observa en cuanto al sindicato, la que no excluye el empleo de la violencia policial, como en el caso de la huelga de los metalúrgicos de São Paulo, Osasco y Guarulhos (250.000), en 1978. Igualmente frecuente es la represión por parte de la policía civil y/o militar, la que se aplica independientemente del número de huelguistas, así sean 170 trabajadores del transporte urbano paulista, en 1978, o 200.000 y 240.000 metalúrgicos de Río de Janeiro y del ABCD, respectivamente, en 1979. Las dos grandes huelgas del año siguiente -240.000 metalúrgicos del ABCD y una cifra similar de trabajadores rurales pernambucanos- son objeto de fuerte represión policial. Ésta produce corridas, detenciones, heridos y hasta la muerte, como en los casos de las huelgas de 280.000 metalúrgicos de São Paulo, Osasco y Guarulhos, de 3.000 trabajadores del transporte urbano de Salvador y de 80.000 obreros de la construcción de Belo Horizonte, todas en 1979, en cada uno de los cuales hay un huelguista muerto. En la primera de ellas, el muerto es Santo Dias da Silva, uno de los principales organizadores del sindicalismo católico, circunstancia que, como alega Maria Helena Alves, fortalece a la IC en su posición en favor de los derechos de los trabajadores y en contra de la violencia estatal.

Hay, pues, varias respuestas gubernamentales, incluyendo combinaciones diversas. Es así como se recurre a la total movilización del ejército, la ocupación de locales estratégicos y de ciudades donde se realizan huelgas, la subordinación de las autoridades civiles de éstas a las militares (durante el período de huelgas de 1980, el comandante del Segundo Ejército se convierte en virtual gobernador del estado de São Paulo), los ataques a manifestaciones y concentraciones, la detención -"en verdaderas operaciones de secuestro" (como las

²⁴ Lula es, obviamente, el caso más conocido y relevante, pero no es el único. Varios liderazgos sindicales de esos años se transforman luego en liderazgos políticos: uno de ellos -amén, otra vez, del de Lula- es el del recién citado Olivio Dutra, presidente del sindicato de empleados bancarios de Porto Alegre -preso cuando la huelga de éstos en 1979-, ciudad de la que es elegido prefecto, por el PT, en las elecciones de 1988; cuando deja el cargo, en 1992, se evalúa su administración como perfecta, logrando que su sucesor, Tarso Genro, pertenezca a su mismo partido, rompiendo así una tradición que desde 1951 consagraba nuevo prefecto a un opositor del saliente. En 1994, Dutra disputa el cargo de gobernador de Rio Grande do Sul, llegando a la segunda vuelta, en la que es ligeramente superado por Antônio Brito, del PMBD y apoyado por el PSDB (49.57 contra 45.38 %).

²⁵ Maria Hermínia Tavares de Almeida, una excelente conocedora del movimiento obrero brasileño, escribe: "Después de la reforma partidaria de 1979, la acción sindical ya no puede más ser pensada sin tomar en consideración su compleja imbricación con el sistema de partidos" (en "Sindicalismo brasileiro e pacto social", *op. cit.*, p. 116).

llama Alves)- de los principales dirigentes huelguistas y hasta de abogados defensores, incluso bajo protección de la "extraterritorialidad" de las iglesias o de las inmunidades parlamentarias de legisladores (son sacados por la fuerza de las primeras o de los automóviles de los segundos). Tales operativos represivos se realizan con empleo de armas pesadas, vehículos blindados y helicópteros del ejército, que se suman a los efectivos de la infantería y de la Policía Militar. La reacción obrera es siempre la resistencia organizada no violenta, una actitud que juega a su favor frente a la campaña gubernamental sobre el carácter "subversivo" que le achaca al movimiento (Alves, 1984: 261).²⁶

En quinto lugar, algunos empresarios -no sin antes resistir y apelar a medidas represivas- terminan modificando su relación con la clase obrera a partir de la acción del *novo sindicalismo* y, en consonancia con los dirigentes de éste, realizan lo que Skidmore llama un "by-passing parcial del sistema corporativista", representado por la aceptación de las negociaciones directas entre unos y otros (negociaciones colectivas), formalmente prohibidas mas impuestas en la práctica como parte de "un conjunto de mutuas obligaciones paralelas al sistema oficial de normas y procedimientos legales" (1984: 416-417). Igualmente son admitidas la nueva organización sindical y las libres elección de representantes sindicales y su circulación dentro de las plantas. Lo destacable del cambio es que tiene por protagonistas, en el campo de la burguesía, a las grandes empresas multinacionales que constituyen el sector de punta de la industria brasileña, en particular la automovilística -la mayor de la periferia capitalista a escala mundial-, cuyas grandes fábricas -Volkswagen, Ford, General Motors, etc.- son sucursales de matrices ubicadas en países donde la práctica de la negociación colectiva es moneda corriente. Como es obvio, estos cambios en las reglas de la relación capital-trabajo no implican un alineamiento político de los empresarios con las posiciones de las nuevas dirigencias sindicales ni una alteración de los elementos estructurales de tal relación. Empero, su importancia política en el proceso de salida de la dictadura es muy considerable: los sindicatos del Grande São Paulo (el ABCD) y de las industrias de punta, los muy aguerridos de "cuello blanco" y los de trabajadores rurales no sólo erosionan el viejo régimen laboral corporativo, sino que contribuyen a la remodelación institucional de la sociedad civil y a su movilización por la democracia. La lucha por ésta va definiendo las identidades política y social de sus protagonistas -lo que no es poco en el caso de los trabajadores brasileños-, cuya proyección llega hasta hoy.

Pese a la magnitud de los cambios cuanti-cualitativos operados en el interior de la clase obrera y sus estructuras organizativas (sindicales y políticas), no toda ella es partícipe de ellos y/o los acompaña. El distanciamiento se aprecia particularmente en los posicionamientos políticos, tal como lo indican los resultados electorales obtenidos por el PT en 1982. De hecho, una parte considerable -si no mayoritaria- de la clase obrera vota en esa compulsa por el PMBD, ese gran arco o frente opositor que engloba un abanico de posiciones partidarias, incluyendo el PCB, el PC do B y hasta supervivientes de la guerrilla (entre ellos los del M-8), algunos de cuyos representantes son elegidos diputados bajo aquella sigla.

La movilización de la sociedad civil brasileña bajo la dictadura no termina aquí: en 1984 ella protagoniza la formidable y masiva campaña popular por la *Diretas já!*, en favor de la profundización del proceso democratizador. Su desenlace es clave para la definición de la propia transición.

Diretas já!

El 8 de abril de 1983, en un acto público, el presidente João Figueiredo ratifica su posición favorable a la elección indirecta de su sucesor en 1985 pues, según dice, desea «un proceso sucesorio tranquilo, rigurosamente

²⁶ Pueden verse los detalles en los ya citados cuadros 10, 11 y 12 del Apéndice del libro de Alves (1984).

pautado por las normas constitucionales vigentes». El mensaje explícito, en particular a la oposición, es que rechaza la propuesta de elección directa, que por entonces comienza a reactivarse.²⁷ En efecto, en enero, el diputado Dante de Oliveira, del PMDB, presenta en la Cámara un proyecto de enmienda constitucional que restablece las elecciones directas para los cargos de presidente y vice de la república.²⁸ El procedimiento formal trasciende inmediatamente los marcos legislativos: el 27 de marzo, *Folha de S. Paulo* publica un editorial en favor de la elección directa en todos los niveles y cargos; en abril, dan su apoyo a la iniciativa el cardenal Evaristo Arns y Dom Ivo Lorscheiter, secretario general de la CNBB; el 28 de junio, en Rio de Janeiro, los gobernadores Brizola y Montoro y el presidente nacional del PT, Lula, acuerdan articular un *Comitê Suprapartidário Pro-Diretas* para bregar por la restauración de las elecciones directas; a mediados de julio, una encuesta realizada por *Folha de S. Paulo* revela que 40.8 % de los entrevistados se inclina en favor de tal restablecimiento, contra apenas 12.7 % partidario de la elección indirecta, por el colegio electoral, del próximo presidente.

A lo largo del año la consigna *Diretas já!* acrecienta sus apoyos -la OAB, la Comisión Justicia y Paz, la prensa, artistas e intelectuales, futbolistas, periodistas, animadores de la TV...- y a partir de noviembre gana las calles de todo el país. Entre los cantantes y músicos populares se destaca la participación de Chico Buarque de Holanda, Milton Nascimento, Elba Ramalho, Fafá de Belém y otros. Otros connotados militantes de la causa son la actriz Sônia Braga, el talentoso futbolista Sócrates (del Corinthians y de la selección nacional), el relator y comentarista deportivo Osmar Santos, los animadores de televisión Chacrinha y la bella Xuxa, el célebre abogado defensor de presos políticos Sobral Pinto (con sus 90 años), entre tantos nombres.

El primer acto se realiza en Goiânia (la capital de Goiás), el 15 de junio, organizado por el PMDB, con 5.000 manifestantes, y una semana más tarde le sigue otro en Teresina (Piauí). La maratón de actos continúa por diferentes ciudades pequeñas y medianas del país -la estrategia es dejar las principales para la fase final, previa a la votación de la enmienda en el Congreso- y en ella se destacan particularmente Ulysses Guimarães, presidente nacional del PMDB, y el senador por Alagoas Teotônio Vilela, que pasan a ser figuras emblemáticas de la campaña. También brillan el presidente nacional del PT, Lula -orador en la mayoría de los actos y quien alcanza, por esta vía, dimensión nacional- y los gobernadores Franco Montoro y Tancredo Neves. Leonel Brizola tiene una actuación más opaca, no exenta de ciertas ambigüedades y de resquemores por el resultado final (no sólo el de la votación).

Estimaciones de la época señalan que durante toda la campaña participan de los actos y reuniones unos cinco y medio millones de personas. Otro cálculo indica que Ulysses Guimarães -el verdadero director de la movilización y a quien llaman "*Senhor Diretas*"- recorre un total de 40.000 kms. La participación de Vilela es especialmente significativa: antiguo hombre del oficialismo, en abril de 1979 se pasa al MDB (permaneciendo luego en el PMDB), destacándose por sus denuncias de casos de torturas y su lucha contra ésta y en favor de la amnistía. Su presencia en la campaña por las directas tiene un contenido dramático, pues se sabe que el cáncer del que está enfermo no le deja mucho tiempo de vida. Efectivamente, Teotônio Vilela (nacido en 1917) muere, en Maceió, el 27 de noviembre de 1983 y de ahí en más se convierte en la figura emblemática de la campaña: muñecos que representan su figura aparecen en todos los actos y manifestaciones y Milton Nascimento le dedica

²⁷ Un relato de la campaña *Diretas já* puede verse en Ricardo Kotsko, *Explode um novo Brasil: diário da campanha das diretas*, Editora Brasiliense, São Paulo, 1984, amén, claro está de la prensa de la época. *Folha de S. Paulo* -el primer diario que se pronuncia públicamente (editorial de la edición del 24 de marzo de 1983) y el que más se compromete en favor de ellas- publica un interesante balance al cumplirse el décimo aniversario de la votación en el Congreso: véase la edición del 24 de abril de 1994, Suplemento "Mais!", pp. 4-7. He recurrido a ella, en buena medida, para el presente análisis.

²⁸ Como dato curioso consigno que en las elecciones del 3 de octubre y 15 de noviembre de 1994, Dante de Oliveira, actualmente en el PDT, es elegido, en la segunda vuelta, gobernador de Mato Grosso

una composición, *Menestrel de Alagoas (Trovador de Alagoas)*, que se convierte en el himno de aquella, interpretada por la paranaense Fafá de Belém que la canta en 32 actos, tras lo cual arroja al aire una paloma blanca.²⁹

El 15 de octubre, cuando comienza a crecer la campaña *Diretas já!*, ocho gobernadores del PMDB se reúnen en Foz do Iguaçu y dan a conocer un documento exhortando al Congreso a "votar la enmienda a la Constitución, estableciendo elecciones directas también para la sustitución del actual presidente". El 26 de noviembre, un día antes del deceso de Vilela, reunidos en el *Palácio dos Bandeirantes*, la casa de gobierno paulista, los gobernadores pemebedistas Tancredo Neves (Minas Gerais), Gilberto Mestrinho (Amazonas), Jáder Barbalho (Pará), José Richa (Paraná), Iris Resende (Goiás) y Franco Montoro (São Paulo), firman un manifiesto por el restablecimiento de las elecciones presidenciales directas. Al día siguiente, el luto por la muerte de Teotônio coincide con el primer gran acto efectivamente masivo (30.000 personas), realizado por el PT en la plaza Charles Muller (Pacaembu), en São Paulo, donde al reclamo común se suman críticas a la política norteamericana hacia Cuba y Nicaragua.

Del acto petista en más, el reclamo se instala decididamente en las calles y se torna clamor. El 12 de enero de 1984 tiene lugar, en Boca Maldita (Curitiba), el llamado lanzamiento nacional de la campaña, un acto del que participan entre 30 y 50.000 personas. El 25 del mismo mes, coincidiendo con el 400º aniversario de la fundación de la ciudad de São Paulo, de 200 a 300.000 manifestantes se reúnen durante seis horas en la *Praça da Sé*. La TV Globo -de la poderosa red de medios de comunicación de Roberto Marinho, opositor de las directas- difunde las imágenes diciendo que se trata de... la celebración del cuarto centenario de la ciudad.³⁰ Según Bresser Pereira, este acto es la mayor manifestación popular ocurrida hasta entonces. Si bien la decisión de realizarlo, en momentos de dudas generalizadas, es mérito del gobernador Franco Montoro, el mitin no es suyo ni de ningún partido político, ni de las organizaciones de extrema izquierda, como tampoco lo es de los trabajadores, la clase media, los estudiantes, los jóvenes o los viejos. El masivo acto, a su juicio, es "de todos". Tampoco se explica, añade, por la precedente campaña publicitaria, "porque si la causa no hubiera tomado anteriormente las mentes y los corazones de la gran mayoría de la población paulista, jamás habría sido posible reunir en la *Praça da Sé* y sus alrededores semejante multitud. La sociedad civil y el pueblo se manifestaron, así, unidos en la *Praça da Sé*" (Pereira, 1985: 160-161).

Entre el 13 y el 20 de febrero se efectúa la *Caravana das Diretas*, sucesión de actos por ciudades de

²⁹ Márcio Moreira Alves es autor de una biografía del político alagoano: *Teotônio, guerreiro da paz*, Editora Vozes, Petrópolis, 1983.

³⁰ Por ese entonces, la *Rede Globo* ocupa el cuarto lugar entre las grandes redes mundiales (*networks*), obteniendo en 1985 ganancias de 120 millones de dólares. Amén de las estaciones de TV, este grupo de multimedios es propietario del diario *O Globo*, de emisoras radiales, de una editorial, una grabadora audiovisual (discos, cassetes y videocassetes), una empresa electrónica, una productora de programas publicitarios, una empresa promotora de espectáculos, una galería de arte. Tiene sede en Rio de Janeiro y sus actividades datan de 1957. Puede verse, al respecto, Armand e Michèle Mattelart, *O carnaval das imagens. A ficção na TV*, Editora Brasiliense, São Paulo, 1987. A propósito de su papel durante la campaña por las directas, escribe Skidmore: "Cuando la campaña comenzó, la TV, sobre todo la TV Globo, ignoró los actos, por instrucciones del gobierno. Pero a medida que aumentaba el entusiasmo popular, las redes de televisión advirtieron que estaban perdiendo importante material periodístico sobre un relevante acontecimiento político. Comenzaron entonces a cubrir los actos del principio al fin. Súbitamente, aquel poderoso vehículo, que el gobierno explotara tan hábilmente, estaba ayudando a la oposición. Y el liderazgo era de la TV Globo, a la cual el gobierno militar proporcionara la oportunidad de crecer y generar jugosas ganancias. Era una dramática demostración de que el prestigio de gobierno estaba declinando" (1988: 468-469). La referencia de Skidmore al apoyo militar es, particularmente, a la expresa participación del mariscal Castelo Branco, presidente de la república, en las negociaciones que Marinho realiza con el grupo Time-Life; los norteamericanos aportan cinco millones de dólares, tecnología y técnicas administrativas y comerciales; en 1969, la Globo compra la totalidad de las acciones de Time-Life (49 %) y controla totalmente la sociedad (Mattelart). En 1989, el grupo multimedia de Marinho, sobre todo a través de las estaciones de radio y TV, juega un preponderante papel en la promoción de la candidatura presidencial triunfante de Fernando Collor de Mello (de la cual se dice, justamente, que es una creación de la Rede Globo). En 1994 apoyan al binomio Cardoso-Maciél.

estados del norte, nordeste y centro-oeste encabezada por los presidentes nacionales de los tres partidos opositores: Ulysses, Lula y Doutel de Andrade (éste, del PDT). Desde el 16 de febrero hasta el 13 de abril, los actos y manifestaciones más importantes ocurren en Rio de Janeiro (40.000 personas), Belém (60.000), Belo Horizonte (250.000), nuevamente Rio de Janeiro (en esta ocasión, 21 de marzo, organizada por el PT y sin el apoyo de Brizola, participan entre 150 y 300.000 personas), Petrolina (la más importante ciudad del *sertão* pernambucano y un reducto petista, 30.000), tercera en Rio de Janeiro (el 10 de abril, en la Candelaria: entre medio y un millón, según diferentes estimaciones), Goiânia (300.000), Ipatinga (Minas Gerais, 50.000), Porto Alegre (250.000).

El 16 de abril se produce la mayor de las concentraciones populares por el restablecimiento de las elecciones directas. Tiene lugar en el Vale do Anhangabaú, en la ciudad de São Paulo. Osmar Santos, el popular comentarista deportivo de la Rede Globo devenido presentador de los actos, anuncia a la multitud que se han concentrado 1.700.000 personas.³¹ El comercio cierra sus puertas, en señal de adhesión. El acto dura tres horas: los principales oradores son Montoro, Lula, Neves, Brizola y Guimarães, a los que se suman otros que no representan a los partidos, como Sócrates. La actuación de Fafá de Belém produce un episodio a la postre simbólico: tras interpretar *Menestrel de Alagoas* y soltar la paloma blanca, ésta -afectada por la sed- no puede remontar vuelo y cae extenuada a los pocos metros.

En Vitória (capital de Espírito Santo) se congregan casi 80.000 personas el 18 del mismo mes. El 22, durante la *Semana da Inconfidência*, Tancredo Neves, José Richa, Esperidião Amin y Wellington Moreira Franco leen, en la cuna de la rebelión contra la corona portuguesa, en 1789, la Carta de Ouro Preto, un reclamo más en favor de la aprobación de la enmienda. El mismo día de la votación en el Congreso, el 25, tienen lugar manifestaciones en Brasilia y las principales ciudades del país. Los actos continúan después de la decisión parlamentaria: al día siguiente hay una manifestación estudiantil en la capital, ciudad donde el 1 de junio se realiza un nuevo acto, al que sigue, el 26 del mismo mes, los cuartos en São Paulo (100.000 personas en la *Praça da Sé*) y Rio de Janeiro (marcha-acto con otros cien mil manifestantes reunidos en Cinelandia).

Toda la campaña tiene, como dice Skidmore, un clima de fiesta y de entusiasmo populares. Los actos y marchas son pacíficos y disciplinados, ni siquiera turbados o amedrentados por las provocaciones del servicio de inteligencia del Ejército, que se dedica a fotografiar a los participantes, en particular a los que se encuentran bajo los carteles pidiendo la legalización del Partido Comunista (1984: 469). Es que, según interpreta Wanderley Guilherme dos Santos -diez años después, en el suplemento recordatorio de *Folha-*, entonces son aventados "todos los miedos, temores, todas las sombras, amenazas, intimidaciones".

El color amarillo es distintivo de los partidarios de las directas, difundido por *Folha de S. Paulo*, que durante la semana previa a la votación de la enmienda Dante incluye en su primera página una tarja de ese color con la leyenda "*Use amarelo pelas diretas-já*". Adicionalmente, el diario publica, en su edición del 22 de abril, la nómina completa de los legisladores, con su respectivo número de teléfono, y una exhortación a sus lectores a llamarlos presionándolos en favor de la enmienda. También se usan camisetas con los colores de la bandera o bien con la leyenda "*Quero votar para presidente*", acompañada de un cuadradito marcado con una X (como si fuese un voto).³² Otra idea original es la que se pone en práctica en São Paulo a partir del 23 de febrero de 1984,

³¹ En su recordatorio de 1994, *Folha* dice que esa cifra es exagerada y que, según los cálculos realizados años después, no podían haber más de 400.000 personas. Skidmore le adjudica "más de un millón".

³² Según informa João Batista Natali, la idea de esta leyenda es del senador biónico por Curitiba Afonso Camargo, quien se la presenta a Guimarães y es aprobada. Añade el periodista que Camargo, un converso, se esmera para demostrar lealtad a su nuevo partido, el PMDB, del cual llega a ser secretario general. En 1989 es candidato a presidente por el PTB y luego

cuando mil personas inauguran en la *Praça da Sé* el denominado *Placar das Diretas*, un enorme cartel en el que figuran los nombres de todos los congresistas y su posición frente a la enmienda Oliveira.

La reacción del gobierno, sorprendido por esta acción opositora demostrativa de iniciativa política -hasta entonces casi siempre privativa del oficialismo- y de un formidable apoyo popular, no encuentra argumentos capaces de torcer la campaña y revela su impotencia para frenar las manifestaciones masivas en favor de la democratización política. El 29 de diciembre de 1983, Figueiredo lee, por la cadena nacional de radio y televisión, un mensaje calificando a la campaña por las directas como un movimiento perturbador del orden, una evaluación a la que nadie podría considerar un dechado de argumentación. Dentro de una tónica marcada por lugares comunes, la única elocuente reacción pública del oficialista Partido Democrático Social (PDS) es la de Antônio Carlos Magalhães, jefe de campaña de la precandidatura presidencial de Mário Andreazza, que el 2 de febrero propone que sea el propio gobierno quien promueva ante el parlamento la restauración de las elecciones directas. No sólo fracasa con su proyecto, sino que el 31 de marzo el presidente, otra vez por la cadena nacional de radioteledifusión, reitera que su sucesor será elegido indirectamente. El 16 de abril, el mismo día del monumental acto paulista, el Ejecutivo anuncia por la cadena radial y televisiva que ha enviado al Congreso el proyecto conocido como enmienda Leitão de Abreu, una alternativa a la Dante de Oliveira, disponiendo la reducción del mandato del próximo presidente a cuatro años y la elección directa de su sucesor en 1988. Dos días después, Figueiredo decreta "medidas de emergencia para la salvaguardia de las instituciones", a aplicar durante 60 días en Brasilia y nueve municipios vecinos del estado de Goiás. El 26, el día siguiente a la sesión del Congreso, es reprimida violentamente la ya indicada marcha de protesta de estudiantes de la Universidad de la capital, incluyendo la entrada de las fuerzas militares en la escuela donde se refugian los manifestantes.

A juicio de Luiz Carlos Bresser Pereira, la oposición a las elecciones directas es postura de sólo dos grupos, el "de los políticos oportunistas dentro del PDS, ligados principalmente a Paulo Maluf, y [el] de los restos de la extrema derecha militar y civil, que tienen miedo de la manifestación popular" directa. De ambas oposiciones, la segunda es la "más significativa". Desde 1964, la posición contraria a las elecciones directas ha tenido amplia acogida en la sociedad brasileña (Bresser Pereira la evalúa como mayoritaria), no siendo "una posición exclusiva de la extrema derecha, ni siquiera de la alta burguesía conservadora, sino que contaba con el apoyo de amplios sectores de las clases medias". El cambio de posición se produce paulatina pero firmemente, *pari passu* el agotamiento y deterioro del régimen. Sin embargo, añade el autor, cuando el alto empresariado partidario de la redemocratización entra de manera decidida e irresponsable en el juego de los presidenciables, queda claro que aún hay "sectores importantes de la sociedad civil apostando a las elecciones indirectas y con miedo de las directas" (Pereira, 1985: 154-155).

La aplicación del "estado de emergencia" en Brasilia y alrededores genera un episodio significativo, en especial en el plano simbólico. Si bien hay militares preocupados por la magnitud de las concentraciones, las banderas rojas que aparecen en ellas y la presencia de líderes indeseables, como Lula y el todavía odiado Brizola, todo lo cual les recuerda el clima de la izquierda movilizada en los finales del gobierno Goulart, los de la línea dura están claramente a la defensiva. Empero, uno de ellos, el general Newton Cruz, ex jefe del SNI, ocupa la importante función de comandante militar del Planalto (la sede presidencial). Como tal es el responsable de las acciones tendentes a evitar "desórdenes". El comando de la campaña, a su vez, pretende (a) una demostración masiva de apoyo a la enmienda y (b) evitar acciones represivas fundadas en los poderes otorgados por el "estado de emergencia". Para ello convoca a sus partidarios a dirigirse, en automóvil, hacia la Plaza de los Tres Poderes,

ministro de Fernando Collor de Mello. He ahí un buen ejemplo del proverbial travestismo partidario presente en la cultura política brasileña.

donde se encuentra el edificio del Congreso, no entrar en éste y desfilar haciendo sonar ininterrumpidamente sus bocinas en señal de adhesión a la reforma. El general Cruz intenta impedir el "bocinazo", pero al advertir que los conductores no acatan sus órdenes no encuentra mejor respuesta que la de empezar a repartir golpes sobre los vehículos... utilizando el chicote con que azuza a su caballo, "como si fuese un George Patton redivivo". Los medios de comunicación captan la escena y la difunden a todo el país (la televisión tiene prohibida, en cambio, la transmisión de la votación en el recinto). "El simbolismo era inequívoco: la personificación del militar extremista parecía al mismo tiempo impotente y ridículo" (Skidmore, 1988: 471).

Dentro del PDS, finalmente, hay un buen número de legisladores que comparte el proyecto de retorno a la elección directa de presidente y vice en 1985. Su número llega a 64, aunque a la hora de la votación es algo menor. Otros connotados dirigentes tienen una posición hesitante, como en el caso del vicepresidente Aureliano Chaves, quien sostiene que las directas son una cuestión sobre la cual hay consenso y para cuya solución la enmienda Leitão es una buena base para la negociación. Significativamente, Tancredo Neves, coincide con esa apreciación: el 16 de abril (el día del masivo acto paulista y a nueve de la votación) declara que si el proyecto de Oliveira no prospera, el de Leitão "es un punto de partida para el entendimiento".

La sesión del Congreso, el 25 de abril, dura 18 horas, al cabo de las cuales el proyecto de enmienda presentado por Dante de Oliveira obtiene, de parte de los 366 legisladores presentes, 298 votos afirmativos, 65 en contra y 3 abstenciones. Entre los positivos, 55 pertenecen a pedesistas que contrarían la posición de su propio partido. Los 113 ausentes son gubernistas, excepto uno de la oposición, el diputado Mendonça Falcão, del PTB paulista. No obstante la fuerte diferencia, el resultado no alcanza para aprobar la enmienda: necesitaba sólo 22 votos más. El número de ausentes es un dato no carente de relieve, indicador de las vacilaciones que se extienden entre los políticos oficialistas, pero también de oportunismo pues, como señala el jurista Dalmo de Abreu (en el recordatorio de 1994), ellos optan por contrariar la voluntad popular y privilegiar sus intereses personales y partidarios.

En una visión muy crítica de la campaña, Florestan Fernandes -el prestigioso sociólogo enrolado en el PT- traza esta evaluación: "Realmente, el «movimiento de las directas» proporcionó una radiografía política de la sociedad brasileña actual. Lo que esa radiografía reveló asustó a los círculos conservadores del principal partido de oposición, impulsó a los «liberales» o políticos «civilizados» del gobierno dictatorial a cambiar de barco en pleno viaje y estimuló a los militares de la Presidencia y de otros órganos estatales a aprovechar la oportunidad para retirarse del centro del escenario hacia los bastidores (resguardando para sí, sin embargo, el derecho de «guardianes» de la democracia emergente!). Así, podían protegerse a corto plazo, intervenir en los acontecimientos de acuerdo con sus conveniencias e intereses y contrabandear para el nuevo gobierno todas las instituciones y estructuras del *Estado de seguridad nacional* que ya estaban montadas y funcionando" (Fernandes, 1985: 12).

En franco contraste, Bresser Pereira sostiene: "Esta ampliación y democratización de la sociedad civil ya tornaba difícil, si no es que inviable, la pura y simple conciliación de las élites. La histórica campaña cívica por las elecciones directas dio una nueva dimensión a esa ampliación de la sociedad civil porque trajo otro actor para la escena política: el pueblo -el conjunto de ciudadanos iguales ante la ley-. En ese momento el pueblo ganó la mayoría de edad, identificándose con la sociedad civil y abrió un nuevo capítulo para la historia política de Brasil" (Pereira, 1985: 168).

Como es obvio, las interpretaciones sobre un hecho político de la magnitud del movimiento *Directas já!* no pueden menos que ser varias y controvertidas, mucho más cuando buena parte de ellas está sesgada por

(legítimas) motivaciones partidarias. Empero, es posible trazar un cuadro algo menos comprometido con ellas. Ya en el mismo momento de la lucha, pocos días después de la derrota parlamentaria, la revista *Veja* señala, en su edición del 2 de mayo, que "la participación popular en la campaña por elecciones directas cambió el eje central de la política brasileña" (citado en Skidmore, 1988: 471, n. 75). He ahí una apreciación insoslayable. Diez años después, Wanderley G. dos Santos entiende que el de las "Directas ya! fue el segundo movimiento extrapartidario (el primero fue el de la amnistía), mas el primero en ocupar las plazas y los paseos, las calles, callejuelas y bares. (...) Más que una demanda política circunstancial, el movimiento, porque fue irreprimible, decretó el fin de la dictadura".³³

Para Dalmo de Abreu Dallari, la debilidad de los principales dirigentes de la campaña lleva a una secreta salida negociada, postergando el retorno de las elecciones presidenciales directas. Es severo con Guimarães, de quien dice que a pesar de tener a su favor "una firme y corajuda resistencia al régimen autoritario, prefirió abandonar la posición de lucha al frente del pueblo y retornar a su viejo estilo de negociador político". A su vez, el politólogo Paulo Sérgio Pinheiro -que en 1984 es asesor del gobernador Montoro- indica que por entonces hay varios juegos desarrollándose simultáneamente en varios tableros: "Un juego era la campaña de las directas, los actos, el amarillo que inventó Caio Graco Prado, el frente para actuar con el PT y el PDT, movilización en las calles. Otro juego eran los entendimientos de Tancredo Neves, el grupo mineiro y sus conexiones paulistas [entre las cuales el propio Montoro], para escindir al partido de gobierno con vistas al Colegio Electoral y tranquilizar a los militares. (...) *La campaña de las directas expone y actualiza las dos vertientes que marcan la historia política brasileña*: por un lado, la movilización, la participación popular, la manifestación autónoma de las calles que presiona al inmovilismo, la ruptura. Frente a ella, el «síndrome Bernardo Pereira de Vasconcelos» -el liberal virado conservador en tiempos del Imperio- la compulsión para frenar el «carro revolucionario» (mera alegoría, pues siempre se confunden tímidos ensayos de democratización con «revolución»). *En la tradición política de las élites brasileñas, los liberales de ayer prefieren conciliar con los conservadores y conquistar el poder por la vía menos arriesgada*, que en el caso de la transición política de 1984 es la del Colegio Electoral" (las itálicas son mías).³⁴

Mirado en perspectiva histórica, queda claro que por detrás de las masivas movilizaciones populares en favor de la profundización del proceso democratizador se desarrollan "otros juegos" conciliadores. El desenlace de los mismos es clave para la definición de la propia transición. Los juegos, obviamente, son por el poder y tienden a resolverse conforme las viejas reglas de la cultura política brasileña: por arriba y apelando a la conciliación entre las élites. La magnitud de la campaña por las directas no hace otra cosa que introducir otros elementos, tanto dentro del partido oficialista y del principal de oposición cuanto en el juego interpartidario mismo y en las relaciones entre poder central y poderes regionales.

³³ Wanderley Guilherme dos Santos, "Movimento provocou mudanças", en "Mais!", Suplemento dominical de *Folha de S. Paulo*, 24 de abril de 1994, (sexta sección), p. 7.

³⁴ Los artículos de Dallari ("Fraqueza dos líderes levou cruzada a final melancólico") y Pinheiro ("As diretas e o eterno regresso da conciliação") se encuentran en la página 7 del citado suplemento "Mais!" de *Folha de S. Paulo*, 24 de abril de 1994.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abranches, Sérgio Henrique (1982): "Crise e transição: uma interpretação do momento político nacional", en *Dados. Revista de Ciências Sociais*, Vol. 25, nº 3, Rio de Janeiro, pp. 307-329.

Alves, Maria Helena Moreira (1984): *Estado e oposição no Brasil (1964-1984)*, Vozes, Petrópolis.

Ansaldi, Waldo (1995): "Continuidades y rupturas en un sistema de partidos políticos en situación de dictadura: Brasil, 1964-1985", en Silvia Dutrénit Bielous (coord.), *La diversidad de lo partidario durante las dictaduras: Argentina, Brasil y Uruguay*, Instituto Mora, México DF, en prensa.

Drake, Paul (1989): "Los movimientos urbanos de trabajadores bajo el capitalismo autoritario en el Cono Sur y Brasil, 1964-1983", en Marcelo Cavarozzi y Manuel Antonio Garretón, *Muerte y resurrección. Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones del Cono Sur*, FLACSO, Santiago.

Fernandes, Florestan (1985): *Nova República?*, Zahar Editores, Rio de Janeiro.

Grossi, Maria (1989): "El cuestionamiento de la política partidaria: los movimientos de base en el Brasil", en Marcelo Cavarozzi y Manuel Antonio Garretón (comps), *Muerte y resurrección. Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones del Cono Sur*, FLACSO, Santiago.

Pereira, Luiz Carlos Bresser (1985): *Pactos políticos. Do populismo a redemocratização*, Editora Brasiliense, São Paulo.

Skidmore, Thomas (1988): *Brasil: de Castelo a Tancredo. 1964-1985*, Paz e Terra, Rio de Janeiro.

Souza Lima, Luiz Gonzaga da (1985): "A transição no Brasil: comentários e reflexões", en *Contexto Internacional*, Ano 1, nº 1 (Revista semestral do Instituto de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica PUC/RJ), Rio de Janeiro, janeiro-junho 1985, pp. 27-59.